

# MEMORIA

RELATIVA AL CONTRATO DEL

## SERVICIO DE LIMPIEZAS DE MADRID

OTORGADO ENTRE LA EXCMA. CORPORACIÓN MUNICIPAL  
Y LOS SEÑORES DON CARLOS VANDEN EYNDEN Y DON FRANCISCO DELOOZ  
EN 13 DE ABRIL DE 1895

Sometida al estudio del Excmo. Sr. Marqués de Lema, Alcalde Presidente,  
y al de la Comisión de Policía Urbana encargada, por acuerdo de la Excmo. Corporación  
(sesión del día 10 de Julio de 1903), de emitir nuevo dictamen  
sobre la transacción de los litigios pendientes.

*Redactada por*

D. ENRIQUE TERRÓN DE LA GÁNDARA

Apoderado del concesionario Mr. Delooz.

MADRID

IMPRENTA DE EUSTAQUIO RASO A CARGO DE TOMÁS DEL VALLE  
Vérgara, 10.

1903

Ayuntamiento de Madrid

FM-2880







FM-2880.

59/72

MEMORIA  
RELATIVA AL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZAS DE MADRID







# MEMORIA

RELATIVA AL CONTRATO DEL

## SERVICIO DE LIMPIEZAS DE MADRID

OTORGADO ENTRE LA EXCMA. CORPORACIÓN MUNICIPAL  
Y LOS SEÑORES DON CARLOS VAUDEN EYNDEN Y DON FRANCISCO DELOOZ  
EN 13 DE ABRIL DE 1895

---

Sometida al estudio del Excmo. Sr. Marqués de Lema, Alcalde Presidente,  
y al de la Comisión de Policía Urbana encargada, por acuerdo de la Excma. Corporación  
(sesión del día 10 de Julio de 1903), de emitir nuevo dictamen  
sobre la transacción de los litigios pendientes.

---

*Redactada por*

D. ENRIQUE TERRÓN DE LA GÁNDARA

Apoderado del concesionario Mr. Delooz.

---

MADRID

IMPRENTA DE EUSTAQUIO RASO A CARGO DE TOMÁS DEL VALLE  
Vergara, 10.

1903



# MEMORIA

## SERVICIO DE LIMPIEZAS

DE MADRID

Excmo. Sr. D. Juan de Dios, Alcalde de Madrid, y Sr. D. Juan de Dios, Teniente de Alcalde de Madrid.

Excmo. Sr. D. Juan de Dios, Alcalde de Madrid, y Sr. D. Juan de Dios, Teniente de Alcalde de Madrid.

## A. ESTADO DE LA CIUDAD

Excmo. Sr. D. Juan de Dios, Alcalde de Madrid, y Sr. D. Juan de Dios, Teniente de Alcalde de Madrid.



## SUMARIO

---

### I

Origen del arrendamiento del servicio de limpiezas de Madrid.—Adjudicaciones provisional y definitiva.—Subrogación.—Desempeño del servicio por la entidad subrogada.—Rescisión del contrato.—Acciones judiciales entabladas en vía civil ordinaria, gubernativa y contenciosa.—Proposiciones de transacción.—Resoluciones en ellas adoptadas.

### II

Situación ilegal creada entre el Ayuntamiento y los rematantes; entre éstos y la entidad subrogada y entre ésta y el Municipio.—Causa y consecuencias de esta situación.—Consideraciones legales en demostración del derecho del concesionario.—Texto en que se fundan.

### III

Situación actual del Exmo. Ayuntamiento para el desempeño del servicio.—Imposibilidad de salir de ella sin una transacción.—Demostración de los perjuicios causados al Erario municipal por la rescisión.—Consecuencias irrogadas con dicho acto al vecindario y salubridad de Madrid.

### IV

Estado legal que por convenios realizados entre el concesionario Sr. Delooz con la Sociedad general de Saneamiento y con D. Carlos Vaden Eynden han facilitado la transacción.—Ventajas de ésta para el Municipio.—Influencia de la implantación del servicio conforme á contrato en la resolución de las crisis obreras.—Beneficios que reportaría á la Agricultura de España.

---



# RESUMEN

## I

En el presente trabajo se ha tratado de dar una idea general de la situación actual de la agricultura en España, y de los factores que la condicionan. Para ello se han examinado los datos estadísticos que se han publicado en los últimos años, y se han comparado con los de los años anteriores. Se ha visto que la producción agrícola ha disminuido considerablemente en los últimos años, y que esto se debe a una serie de causas, entre las que se cuentan la sequía, la falta de agua, la falta de abonos, la falta de mano de obra, etc.

## II

En el presente trabajo se ha tratado de dar una idea general de la situación actual de la agricultura en España, y de los factores que la condicionan. Para ello se han examinado los datos estadísticos que se han publicado en los últimos años, y se han comparado con los de los años anteriores. Se ha visto que la producción agrícola ha disminuido considerablemente en los últimos años, y que esto se debe a una serie de causas, entre las que se cuentan la sequía, la falta de agua, la falta de abonos, la falta de mano de obra, etc.

## III

En el presente trabajo se ha tratado de dar una idea general de la situación actual de la agricultura en España, y de los factores que la condicionan. Para ello se han examinado los datos estadísticos que se han publicado en los últimos años, y se han comparado con los de los años anteriores. Se ha visto que la producción agrícola ha disminuido considerablemente en los últimos años, y que esto se debe a una serie de causas, entre las que se cuentan la sequía, la falta de agua, la falta de abonos, la falta de mano de obra, etc.

## IV

En el presente trabajo se ha tratado de dar una idea general de la situación actual de la agricultura en España, y de los factores que la condicionan. Para ello se han examinado los datos estadísticos que se han publicado en los últimos años, y se han comparado con los de los años anteriores. Se ha visto que la producción agrícola ha disminuido considerablemente en los últimos años, y que esto se debe a una serie de causas, entre las que se cuentan la sequía, la falta de agua, la falta de abonos, la falta de mano de obra, etc.



## I

Origen del arrendamiento del servicio de limpiezas.—Adjudicación provisional y definitiva.—Subrogación.—Desempeño provisional del servicio por la entidad subrogada.—Rescisión del contrato.—Acciones judiciales entabladas contra el acuerdo de rescisión.—Proposiciones de transacción.—Resoluciones en ellas acordadas.

Constituído el Ayuntamiento de Madrid en 1894, tratose en su primera sesión del nombramiento de las Comisiones respectivas. Al discutirse la de presupuestos, predominó la tendencia de formar ésta con personas de gran prestigio y muy versadas en asuntos administrativos, con el objeto de que la confección de los presupuestos de aquel año económico se basase en reformas radicales, que armonizándose con las economías necesarias, completaran un plan de servicios municipales en relación con los implantados en importantes capitales del extranjero, haciendo así desaparecer el vergonzoso espectáculo que ofrece la actual organización de los mismos en la capital de España.

Nombrada que fué esta Comisión, se procedió por ella en primer término á una minuciosa inspección y estudio de todas las dependencias municipales, redactándose con este motivo Memorias é informes importantísimos sobre el estado y desempeño de los servicios de Consumos, Escuelas municipales, Incendios, Obras, etc., etc.

De todos estos trabajos, Memorias é informes, se ocupó extensamente la prensa de Madrid, insertándose en las columnas de varias publicaciones conceptos altamente honrosos para la Municipalidad por sus demostrados propósitos reformistas y reorganizadores.

De las deficiencias observadas por la Comisión, nacieron importantísimos proyectos, tales como el de red telefónica, creación de la imprenta municipal, construcción de diez edificios consistoriales en los distritos de la capital, en donde estuvieran todas las dependencias facultativas y administrativas municipales de cada uno, y por último, el de saneamiento de Madrid.

De todos estos proyectos, incluídos en el presupuesto de dicho año, solo prosperaron dos, el de la construcción de edificios municipales y el de saneamiento de Madrid. Del primero no hemos de ocuparnos, pues no incumbe al objeto de esta Memoria, pero sí del segundo, único fin que nos guía en pro de los fueros de la justicia, la reconquista del crédito moral y la confianza que es necesario despertar en el vecindario de Madrid y en la prensa periódica, para evitar perseverancias en el extravío de opiniones que vienen produciendo inconscientes apatías generadoras de temores y suspicacias que estorban y quebrantan los



mejores propósitos para la implantación de las reformas higiénicas necesarias en esta tan castigada población de España.

No es esta la primer Memoria ó folleto que con tal objeto se publica, pues el ex-Alcalde primero de Madrid, Excmo. Sr. D. J. Sánchez de Toca, que tantas pruebas dió de su acendrado celo por el prestigio de la Corporación Municipal y el bien del pueblo de Madrid, durante su paso por la Alcaldía Presidencia de esta Villa y Corte, publicó en el año 1897 un concienzudo informe sobre tan debatido asunto, informe que bastaría por sí solo á llenar el fin que nos proponemos, si la falta de inclusión en aquél de algunos pormenores y detalles, más la relación de hechos posteriores llevados á cabo en el mismo asunto y que le han dado mayor relieve é importancia, no nos obligaran á esta nueva publicación.

Hechas estas indicaciones, necesarias á evitar torcidas interpretaciones en nuestros propósitos y razonamientos, entramos en materia.

\* \* \*

El servicio de limpiezas de Madrid, venía haciéndose hasta el año de 1895 por contratos prorrogados numerosas veces. Hacía ocho años que solo la tácita reconducción podía alegarse como derecho en los contratistas para el desempeño de los diferentes servicios á ellos encomendados; durante este tiempo se habían intentado realizar hasta once subastas para el arriendo de este servicio, y todas fueron declaradas desiertas apesar de las reformas continuas que se hicieron en las condiciones facultativas, en las administrativas, en los tipos de subvención y en la división del servicio por zonas, para que los pequeños capitales pudieran hacer proposiciones. Durante este plazo de ocho años fueron giradas diferentes visitas de inspección al Ayuntamiento de Madrid, ordenadas por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, y en todas ellas los respectivos Inspectores del Gobierno encontraron grandes irregularidades y deficiencias respecto al servicio que nos ocupa, acusando en sus informes de negligente á la Corporación y considerando hasta preferible el desempeño de este servicio por administración, antes que tolerar la prolongación indefinida en los contratos repetidas veces caducados y por tanto sin razón para aducir en pro de su continuación argumentos de fuerza legal.

Respecto al modo como por estos contratistas se desempeñaba el servicio, bastará decir que la cifra excesiva de mortalidad consignada en las estadísticas publicadas en aquellos últimos años, fué achacada por la prensa en más de una ocasión y por los autores de diferentes discursos en Corporaciones médicas á estas tolerancias municipales.

Las cubas para el servicio de pozos negros no desinfectaban dentro de ellas las materias fecales; eran de un sistema desterrado por todos los Municipios; carecían de potencia y dejaban considerables residuos sin extraer; en estas condiciones eran conducidas aquellas materias por las calles de Madrid y llevadas á vertederos consistentes en pequeñas



aberturas practicadas en el terreno, las cuales comunicaban con las alcantarillas, en donde después de haber infectado el aire atmosférico, venían á mezclarse con las aguas del río Manzanares, que como es sabido, va á desaguar en las corrientes del Jarama, y éste en las del Tajo, extendiendo así en todos ellos los gérmenes infecciosos de mayor potencia morbosa que se conocen.

Las basuras de las calles y las procedentes de las habitaciones, se transportaban en carros sucios y mal acondicionados, los cuales se descargaban en estercoleros á donde también se conducían animales muertos, encomendando á las lluvias, al aire y al calor, la misión de destruir esas materias orgánicas é inorgánicas, y convirtiendo así los alrededores de la capital en perennes focos de infección que diariamente eran aumentados con considerables acumulaciones.

Percatada la Comisión de tales y tan transcendentales deficiencias en este servicio, de capitalísima importancia para la salubridad pública, formó el firmísimo propósito de cortar de raíz estas inveteradas costumbres, haciendo desaparecer estos sistemas en el servicio de limpiezas y saneamiento de Madrid, tan atentatorios y contraproducentes.

A este fin hizo concienzudos estudios y redactó diferentes informes, presentando un proyecto de nueva organización de estos servicios para su inclusión en el presupuesto de aquel año.

Llegado el día de discutir este capítulo por la Corporación municipal (*único que prosperó de todos los del presupuesto*), los Concejales lo aceptaron con vivo interés, tomando casi todos ellos parte en las discusiones laboriosísimas que se suscitaron con este motivo. Ningún otro asunto, seguramente, habrá sido discutido por la Corporación Municipal, de muchos años á esta parte, con la minuciosidad que éste, y en demostración de ello, bastará recordar que el proyecto se aprobó á los seis meses de presentado, durante los cuales, y en casi todas las sesiones, fué profusamente discutido, oyéndose opiniones del Director de Fontanería y Alcantarillas, del Jefe del Laboratorio Químico Municipal y del Jefe del Gabinete Micrográfico. Se estudió, además, cuanto sobre la materia había escrito el eminente químico Sr. Chicote y cuanto consignado tiene el *Diccionario Enciclopédico* publicado por la casa Montaner.

Deseosa la Comisión de resolver este asunto lo más perfectamente posible, después de discutido sobradamente, llevó su noble propósito hasta el extremo de acordar la impresión del pliego de condiciones, enviando ejemplares á los Ministros, Subsecretarios, Directores generales, Diputados á Cortes por Madrid y provinciales y hasta á la prensa en general, á fin de quedar plenamente convencidos de la conveniencia ó inconveniencia del proyecto por los conceptos ú opiniones que se sustentasen por cuantos quisieran informar.

Sólo elogios y plácemes repetidísimos mereció la Corporación por tal proyecto, que fué examinado, tan escrupulosamente por todos los periódicos, que pudiéramos decir se hizo de él un verdadero estudio de disección en todas las reformas de que constaba.

Formóse así un estado de opinión, en el vecindario de Madrid, su-



mamente grato para la Corporación; la cual, conocedora de la impaciencia con que se aguardaba la reforma, solicitó la oportuna autorización del Gobierno para, bajo tan plausibles condiciones, proceder á la subasta de estos servicios.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación estudió también, con el debido detenimiento, el proyecto, y considerándolo altamente beneficioso para el Erario municipal y la higienización de la capital, procuró evitar toda clase de proverbiales demoras administrativas en la resolución del asunto, concediendo en brevísimos días la autorización que, conforme al Real decreto de Contratación de servicios públicos de 1883 se solicitaba, publicándose esta autorización en la *Gaceta* el día 2 de Enero de 1895 en unión del pliego de condiciones facultativas y administrativas.

Conforme á lo dispuesto en los Tratados de Comercio concertados entre España y demás naciones extranjeras, enviáronse ejemplares de la *Gaceta* á los consulados de España en diferentes capitales y países europeos, entre ellos á la de Bélgica, según el Tratado con el Gobierno de aquélla convenido en 4 de Mayo de 1878.

Los Sres. D. Francisco Delooz y D. Carlos Vanden Eynden, el primero propietario é industrial muy conocido en Bruselas por su pericia en la implantación de importantes centros industriales, y el segundo representante consular de aquel Gobierno en la capital de España, asociáronse con el *único y exclusivo* objeto de establecer en esta Corte una nueva é importantísima industria de fabricación de productos químicos, análoga á las numerosas establecidas en otras capitales de Europa, tomando para ello como base de abastecimiento de primeras materias, las procedentes del servicio de limpieza que se subastaba. A este fin, decidieron que el primero se personase en esta capital y presentara una proposición en la subasta anunciada. Pocos días después, ambos señores, constituían la correspondiente fianza de 32.500 pesetas exigida á todo licitador en el pliego de condiciones.

El 8 de Febrero de 1895 tuvo lugar la subasta, levantando el acta correspondiente el Notario del Ilustre Colegio de Madrid D. Luis González Martínez, en virtud de requerimiento hecho al efecto por el señor Secretario del Ayuntamiento (núm. 428 de dicho año de instrumentos del protocolo del Notario.)

En esta acta se consignó que el servicio municipal objeto de esta subasta, se adjudicaba á los Sres. D. Francisco Delooz y D. Carlos Vanden Eynden, provisionalmente y sin perjuicio de lo que en definitiva acordara el Ayuntamiento, bajo el precio de 650.000 pesetas anuales y por un plazo de treinta años, á contar desde la fecha del otorgamiento; proposición que fué aceptada como la más ventajosa y conveniente para el Municipio.

En sesión del 13 de Febrero de 1895 aprobó por el Ayuntamiento, por gran mayoría de votos, la adjudicación, con la *cláusula condicional de que se entendería hecha mancomunada y solidariamente*.

Habiéndose en algunas resoluciones gubernativas, relacionadas con este asunto, dado una interpretación sumamente equivocada respecto



al sentido legal de las palabras «*mancomunada y solidariamente*» conque fué calificada en el contrato la adjudicación hecha á los concesionarios, conviene, para evitar la repetición de equivocaciones tan capitales, hacer presente que la mancomunidad la definen las leyes diciendo que es *la obligación contraída por dos ó más personas, como principales ó únicas á cumplir lo respectivamente convenido ó contratado*; esto es, que todos los que en el contrato hayan contraído obligaciones son deudores de las mismas, y deudores principales, ya se obliguen simplemente ó cada uno por el todo, y, por tanto, no hay excusión en los bienes del uno para la reconvención del otro por su parte, pues á un propio tiempo puede el acreedor de la obligación ú obligaciones dirigir su acción contra todos.

La condición solidaria es aquella en que cada uno de los obligados queda responsable de la parte de los demás, y por tanto puede á cada uno demandárseles íntegramente, ya convenga al demandante por pobreza de alguno de ellos, ya por ausencia, ya por cualquier otra causa de su propia conveniencia; advirtiéndose en la ley que, pendiente el pleito contra uno de los deudores, puede el acreedor hasta dirigir su acción contra el otro, aunque sea después de dada la sentencia.

Estas disposiciones son recíprocas, y, por tanto, así como el Ayuntamiento podía exigir y demandar cumplimiento á uno ó á ambos adjudicatarios, éstos á su vez podían y tenían derecho á reclamar, cada uno de por sí ó ambos juntos, las obligaciones contraídas por el Municipio; no pudiendo, por tanto, en ningún tiempo, alegarse la falta de personalidad en la interposición de una demanda hecha por uno de ellos porque en la misma no concurra el otro, pues es regla legal que en las obligaciones condicionales de hacer, ambas partes contratantes se obligan omnímoda é idénticamente (á no existir pacto expreso en contrario), y, por tanto, la demanda en el cumplimiento de la obligación primordial, hecha por uno de los concesionarios mancomunados, no necesita de personalidad electiva entre ellos, sino que es potestativa de la voluntad de cada uno, pues puede muy bien uno de ellos hasta abandonar su derecho sin que esto perjudique al del otro, en lo cual se ve lo previsor del legislador que supo á todos poner á cubierto de prevaricaciones y cohechos, á que se prestaria muy fácilmente toda prescripción legal contraria á la evitación de ese perjuicio en las personas que contrajeran obligación mancomunada y solidaria.

Hecha que fué por el Ayuntamiento la adjudicación definitiva en 13 de Abril de 1895, y previa autorización del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, se otorgó la escritura entre el Excmo. Señor Conde de Peñalver, como Alcalde Presidente que era del Ayuntamiento, y los concesionarios ya nombrados.

En ella se consignó la condición antedicha de *mancomunada y solidaria* de la adjudicación, y los concesionarios declararon en este documento que la fianza de 32.500 pesetas depositada hasta entonces con carácter provisional para tomar parte en la subasta, quedaba constituida definitivamente para responder al cumplimiento de cuanto por parte de los mismos se estipulaba, y la que según también era



pactado y en conformidad con los pliegos de condiciones, debía ser devuelta sin demora ni pretexto alguno una vez cumplidas las estipulaciones que también se especificaban para esa devolución.

Por la cláusula quinta del contrato se autorizaba á los concesionarios para transferir sus derechos á favor de cualquier Sociedad anónima, que se comprometiera á realizar los servicios en un todo conforme á lo escriturado, si bien los concesionarios sólo podrían hacer uso de esta facultad en el plazo de tres meses, y aun en este caso, debía la cesión someterse á la aprobación del Ayuntamiento, el cual podría ó no aceptarla.

De no hacerse uso del derecho de cesión en el plazo ya dicho, los concesionarios continuarían, obligatoria é inexcusablemente, como únicos adjudicatarios, cumpliendo por sí mismos las obligaciones escrituradas.

En virtud de esta condición quinta, los concesionarios, el día 11 de Julio de 1895, es decir, dentro de los tres meses condicionales, manifestaron por escrito á la Exema. Corporación Municipal que habían transmitido los derechos y obligaciones de la concesión á una Sociedad anónima, fundada en Bruselas, bajo la razón social de «*Sociedad General de Saneamiento*» y compuestos en su mayoría de capitalistas de dicha nación, esperando que el Ayuntamiento se sirviera aprobarla.

El día 8 de Septiembre de 1895, se manifestó oficialmente al Ayuntamiento que la Sociedad tenía ya construido el material necesario para la prestación de los servicios (en cuya adquisición había invertido *más de un millón de francos*) y esperaba que el Ayuntamiento se sirviese acordar lo que procediera, y que, suponiendo sería aprobada la subrogación, esperaba que la Corporación, en conformidad con el contrato, entregaría á la exponente el material que poseía el Ayuntamiento, señalándola día para empezar á la prestación de los servicios.

El 9 de Septiembre de 1895, la Comisión 3.<sup>a</sup> acordó dictaminar, sobre la instancia antedicha, en el sentido de que por la Sociedad se comenzase la prestación de los servicios desde el día 14 del expresado mes y año, debiéndose ordenar á todos los que venían desempeñándolos por administración, para que en dicho día cesaran en este encargo, acordando también proceder al inventario y avalúo del material que se entregaba á la Sociedad, si bien desde aquel día la posesión que se daba á ésta era provisional y sin perjuicio de la definitiva, por lo que *la provisional que se daba no prejuzgaba ningún derecho*.

Este dictamen fué aprobado en sesión del 20 de Septiembre de 1895, acordándose además el nombramiento de una Comisión especial, presidida por el Sr. Alcalde Presidente, para hacer la entrega.

El 24 de dicho mes y año se hizo cargo del servicio la Sociedad, *provisionalmente y sin prejuzgarse por esto ningún derecho*, sin formalizar escritura ó contrato entre ésta y el Ayuntamiento, *no aprobando ni desaprobando éste la subrogación, y por tanto, sin desligar en nada la personalidad jurídica del concesionario para con el Ayuntamiento ni la de éste para con aquél, en lo que al respecto del contrato estaba obligado*.

En estas condiciones, la Sociedad General de Saneamiento procedió



á la prestación de los servicios, poniendo en uso su nuevo material, comenzando la construcción de la fábrica y montando en ésta toda la costosa maquinaria necesaria.

El 11 de Marzo de 1896, en sesión pública del Ayuntamiento, tres Sres. Concejales presentaron una propuesta pidiendo se abriese información sobre el cumplimiento en sus obligaciones por la Sociedad de saneamiento, acordándose el pase de aquélla á la Comisión 3.<sup>a</sup> para informe.

Evacuado éste en 28 de Abril de 1896, se consignó en él que la Sociedad se había constituido en el plazo señalado, y que cumplía los servicios, pero que no habiéndose aprobado, ni desaprobado, como era indispensable, la subrogación de derechos, no podía exigírsela el cumplimiento estricto en lo contratado, y que por lo tanto el funcionamiento ilegal de la misma exigía requerir inmediatamente al concesionario para que por sí mismo cumpliera lo pactado, pues además la Sociedad tenía su domicilio en Bruselas, y no habiendo renunciado el fuero de su domicilio, no podía aprobarse la subrogación.

La Comisión tercera en 9 de Junio de 1896, acordó que el dictamen de la Ponencia pasase á informe de un Letrado consistorial, un arquitecto y varios Ingenieros; al primero para informar sobre cuestiones legales, al segundo, sobre construcciones realizadas por la Sociedad, y á los últimos, para que lo hiciesen sobre el modo como se desempeñaban los servicios. Este dictamen pasó á ser acuerdo del Ayuntamiento en 13 de Junio de 1896.

El Letrado informó, con razonamientos muy sólidos y extensos, que la subrogación había sido hecha en el plazo y forma convenida, que tanto el concesionario como la Sociedad habían dado cuenta de ello al Municipio á su debido tiempo, y que la residencia en Bruselas de la Sociedad no era obstáculo legal para que, como se pretendía, no se aprobara la subrogación, máxime cuando el Municipio, en caso de incumplimiento, siempre podría exigir y hacer efectiva la responsabilidad en los contratistas, los cuales tenían renunciado dicho fuero en la escritura y prestada la fianza de 32.500 pesetas.

Acordado por el Ayuntamiento el pase de estos informes al pleno de los Letrados consistoriales, fueron éstos del mismo parecer que su compañero el anterior informante, agregando además, en un luminoso informe, que antes de dar posesión definitiva á dicha Sociedad, era necesario otorgar la escritura con ella conforme al Real decreto de contratación de servicios públicos, en cuya escritura podrían renunciar al fuero del domicilio.

El Visitador general de Policía Urbana, en 20 de Junio de 1896, informó que «los servicios se prestaban en forma bastante regular», y el Ingeniero Jefe del ramo de Fontanería y Alcantarillado lo hacía el día 4, exponiendo que «la Sociedad, en lo concerniente á este servicio, lo hacía también con regularidad.» El Arquitecto Jefe del ramo de Incendios manifestó, por oficio del 18 de dicho mes, que «se cumplía el contrato en lo relativo á incendios con exquisita puntualidad.»



Ordenado después por el Alcalde Presidente que la Comisión tercera asistida de un Jefe de Laboratorio, un Arquitecto y el Veterinario decano, levantaron acta consignando el resultado de su visita de inspección á la fábrica, fué cumplida esta orden el 10 de Julio, consignándose que *las máquinas y útiles necesarios al servicio estaban montadas; que los aparatos y departamentos ofrecían aseo y orden; que se notaban corregidas ciertas deficiencias indicadas por un Arquitecto municipal; que por no hallarse en aquel momento funcionando la fábrica, nada podían decir en pro ni en contra respecto á este particular, y que sobre el cumplimiento de las Ordenanzas municipales emitirían más tarde su dictamen.*

En 10 de Octubre ó Noviembre, del 96, acordó la Comisión tercera proponer al Sr. Alcalde Presidente que el pleno de Letrados volviera á informar, acerca del siguiente cuestionario de preguntas:

1.<sup>a</sup> «La Sociedad en la redacción de sus Estatutos, *sometidos á la aprobación del Ayuntamiento*, ¿faltó en algo á lo consignado en la escritura de adjudicación?» Los Letrados contestaron, en síntesis, que en nada se faltó á lo estipulado en la escritura.

2.<sup>a</sup> «El acto de entrega interina del servicio, con las consignadas frases preventivas de «entendiéndose que este encargo, entrega ó posesión tiene el carácter de provisional, y sin que prejuzgue derecho alguno á favor de la Sociedad,» ¿es otra cosa que un acto de posesión precaria que no ha creado vínculo entre el Municipio y la Sociedad con relación á la escritura otorgada á los concesionarios, los cuales continúan obligados en cumplimiento de la misma?» A esta segunda pregunta contestó el pleno de Letrados, sosteniendo que los concesionarios habían hecho uso de un derecho que les concede la escritura, pero que de no aprobarla el Ayuntamiento sería nula la cesión, no estaría extinguida la responsabilidad de los concesionarios y éstos vendrían obligados á cumplir todas las cláusulas del compromiso.

3.<sup>a</sup> «Aceptada por la Sociedad la entrega sin protesta, ¿consintió ó no aceptó el carácter precario provisional dejando á salvo la resolución que debía recaer en su instancia de subrogación?» El pleno de Letrados contestó en sentido negativo al texto de la pregunta.

4.<sup>a</sup> «¿La solicitud de aprobación en los derechos subrogados lo es de renovación de contrato?» Los Letrados contestaron también en sentido negativo.

5.<sup>a</sup> «¿No es evidente que habiéndose *otorgado* á la Sociedad la subrogación no se ha creado vínculo legal y firme entre ella y el Municipio, y los adjudicatarios continúan obligados por la escritura y subsistente su compromiso por haber quedado ineficaz la transferencia y por tanto deben ser compelidos á hacerse cargo de los servicios en un término perentorio, conminándoles con declararles decaídos de su derecho y con rescindir el contrato?» Los Letrados contestaron «que la Sociedad, al aceptar la subrogación, aceptaba las condiciones del contrato, y podía solicitar que el Ayuntamiento otorgara la escritura de subrogación y la entrega definitiva del servicio; mas si la Sociedad lo quebrantaba, *una vez que estuviera dada la posesión definitiva*, carga-



ría con las consecuencias, y los adjudicatarios, por tanto, sólo continuarían obligados en el caso de que se declarase ineficaz la transferencia y la aportación.»

Reunida la Comisión el 18 de Febrero de 1897 apesar de los dictámenes é informes referidos y sin haber sido aprobada la subrogación, propuso al Ayuntamiento que requiriese de oficio á la Sociedad en el término de un mes, para que subsanase todas las deficiencias observadas en el cumplimiento del contrato; deficiencias que, como ya se ve por el informe de los Ingenieros, no existían, cual lo prueba también el no determinarlas la Comisión en su propuesta.

Asimismo, manifestábase «que la Sociedad debía colocarse en condiciones legales para que el Ayuntamiento pudiera llegar á que tenga exacto cumplimiento la escritura de 13 de Abril de 1895 celebrada entre los concesionarios y el Municipio, *conminándola con que si así no lo hacía, se tendría el contrato por rescindido sin que pudiesen reclamar en ningún tiempo indemnización alguna, pues se consideraría caducada la concesión.*» Formularon voto particular algunos Sres. Concejales en el sentido de que lo que procedía era declarar la incapacidad legal, por falta de aprobación de la cesión y del otorgamiento de la escritura de cesión.

Sin duda para poder establecer bases justificativas de actos posteriores, injustos á todas luces, como se demostrará, se impusieron cuantiosas é importantes multas á la Sociedad, contra cuyas imposiciones se entablaron los correspondientes recursos de alzada, demostrándose con el fallo del Tribunal Contencioso lo infundado del castigo, pues todas en absoluto han sido calificadas de injustas al afirmar en el fallo que no ha lugar á su imposición, condenando en las costas causadas en estos recursos de alzada al Ayuntamiento de Madrid.

Puesto á discusión el dictámen y el voto particular en la sesión del 5 de Marzo de 1897, se presentó una proposición suscrita por un solo señor Concejal solicitando que, «previa retirada del dictámen y del voto particular, *se procediese por el Sr. Alcalde Presidente á la incautación del servicio á costa y riesgo de los concesionarios, previa justificación que había de practicarse en diez días, de las infracciones del pliego de condiciones cometidas por la Sociedad*» (la cual no se ha practicado). Esta proposición fué aprobada en sesión de 5 de Marzo de 1897, presidiendo el Excmo. S. D. J. Sánchez de Toca.

El Sr. Alcalde Presidente, que sin duda tenía hecho un minucioso estudio, tanto del derecho especial de incautación, plenamente limitado, que contra los concesionarios se tenía reservado el Ayuntamiento, como de las infracciones que en el contrato se venían también cometiendo por éste, como asimismo de la situación extraña creada entre las confundidas personalidades de gestor interino y gestor de derecho, y comprendiendo sin duda con su acreditada pericia en las cuestiones de Ley administrativa, las consecuencias que podían sobrevenir á la Corporación por tan arbitrario acuerdo; en uso del derecho que le concede la ley municipal, dictó un decreto suspendiendo el acuerdo y publicando después el luminosísimo informe en el cual de-



biera inspirarse la actual Corporación Municipal, pues en él además de lo incontrovertible de sus razonamientos, nutridos de fuerza legal, se indica la verdadera norma de conducta que debió seguirse para la terminación de este asunto tan discutido y únicamente razonado con bastante lógica por dicho Sr. Alcalde Presidente.

Hecha esta pequeña digresión como justo tributo de imparcial agradecimiento al que supo presentar la realidad de las cosas completamente descarnada, sin miramientos bastardos que hagan como él dice muy oportunamente, inducir á sospechas de que se trate de encubrir grandes impurezas, volvemos á continuar nuestra tarea de información.

El 29 de Marzo, la Sociedad general de saneamiento tenía solicitado del Ayuntamiento que se otorgara la escritura de subrogación y se hiciese la entrega definitiva del servicio, cuya solicitud pasó á informe de la Comisión tercera, emitiendo dictamen el 24 de Mayo siguiente y opinando en él: primero, *que no procedía aprobar la transmisión*, y segundo, *que estando subsistentes las obligaciones que contrajeron los rematantes, debió requerirse á éstos para que se encargasen inmediatamente y por sí mismos del desempeño del servicio*, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así, se les rescindiría el contrato.

En reunión de la misma Comisión del día 8 de Junio, tres de sus Vocales formularon voto particular, en el sentido de que debía de darse un mes de plazo á la Sociedad para que subsanase los defectos (no se puntualizaban), que durante dicho plazo se formara el inventario de cuantas propiedades, enseres, etc., pertenecía á la misma, y que de lo contrario, se procediese á la rescisión. Este voto particular pasó á ser dictamen el 25 de Junio de 1897.

En vista de esto, y á fin de consolidar la Sociedad por cuantos medios le eran dables su situación y personalidad, para solicitar se le indicase los defectos cuya subsanación le ordenaba, presentó una instancia, acompañando á ella la documentación á su juicio necesaria, pidiendo nuevamente que se llevase á efecto la aprobación de la subrogación.

Posteriormente, la Comisión tercera dictaminó y el Ayuntamiento acordó: primero, requerir de nuevo á la Sociedad para que en el término de un mes subsanase deficiencias cometidas en el cumplimiento del contrato; segundo, que se colocase en condiciones legales para poder otorgar la escritura de subrogación; tercero, que en el caso de que terminado el plazo sin acreditar el cumplimiento de *las obligaciones de su contrato*, el Ayuntamiento podría ejercitar sus derechos conforme á la escritura de 13 de Abril de 1895; y cuarto, que si á satisfacción de los Letrados consistoriales se cumplimentan los particulares contenidos en el primero de estos acuerdos, el Ayuntamiento procedería á otorgar la escritura de subrogación á favor de la Sociedad, como ésta solicitaba en 29 de Marzo.

El 1.º de Octubre los Letrados consistoriales (cumpliendo un decreto de la Alcaldía Presidencia), emitieron el nuevo informe le que se habla en el acuerdo anterior, en el cual, y á fin de no repetir con-



ceptos ya consignados, baste decir que en nada discrepaba éste de los suscritos en otras ya enumeradas ocasiones, por los Sres. D. Magín Mitjans, D. Manuel María Moriano, D. Ignacio Suárez García, D. Gregorio Campuzano y D. Antonio R. de Póo, cuyos nombres consignamos con gusto por ser el único tributo que dada la entereza de criterio legal con que supieron sostener los fueros de la justicia, podemos otorgarles unido á nuestra admiración.

La Comisión tercera emitió dictamen en el sentido de que *no procedía conceder la subrogación, y que se debía declarar rescindido y caducado el contrato, incautándose del servicio mediante embargo provisional inmediato de todo el material de la Sociedad y considerar perdida la fianza por los concesionarios.*

Por último, el día 11 de Diciembre de 1897, se aprobó el dictamen de la Comisión y el del entonces Alcalde primero, en virtud del cual quedó rescindido el contrato, embargado provisionalmente el material y perdida la fianza para el concesionario.

Estos neronianos acuerdos fueron, como era de suponer, recurridos en alzada ante el Gobernador por el concesionario del servicio Sr. De looz, no concurriendo el otro concesionario Sr. Vanden Eynden, por que la cualidad de solidarios en la adjudicación, daba á cualquiera de ellos por sí solo el derecho á reclamar, cual si los dos lo hicieran unidos (C. C., arts. 1.141 y 1.142, y ley de contratación de servicios públicos de 4 de Enero de 1883).

La Sociedad General de Saneamiento interpuso también, por separado, otro recurso de alzada contra dicho acuerdo.

El Excmo. Sr. D. Raimundo Fernández Villaverde (Presidente en la actualidad del Consejo de Ministros), como letrado y en nombre y representación del concesionario D. Francisco Delooz, interpuso á su vez demanda civil ordinaria contra el Ayuntamiento de Madrid por ilegal incautación y rescisión del contrato del servicio de limpiezas, la cual se sustanció en el Juzgado de la Inclusa, *cuyo fallo fué condenatorio para el Ayuntamiento*, y del cual éste recurrió, declarando la Audiencia la procedencia en la inhibición del conocimiento del asunto.

En esta situación de espera de resoluciones judiciales; han transcurrido siete años, durante los cuales el Ayuntamiento de Madrid ha acordado é intentado diferentes veces sacar á subasta los servicios, teniendo que dejar sin efecto dichos acuerdos é intentos, unas veces por suspensión de los mismos, acordada por la Superioridad ante los nuevos recursos de alzada interpuestos y pendientes hoy de resolución, y otras por las actas notariales de protesta levantadas á instancia del concesionario al irse á realizar la subasta. Asimismo, innumerables veces ha discutido el Ayuntamiento la conveniencia de incluir en presupuestos considerables cantidades para la adquisición del material y ganado necesario al desempeño del servicio, en cuyos debates se ha puesto de relieve la imposibilidad de realizarlo ante el temor de que las resoluciones esperadas de los Tribunales hicieran inútiles estos desembolsos, que en tal caso sólo podrían favorecer al concesionario.

Durante los siete años transcurridos, el Ayuntamiento ha continua-



do haciendo uso indebido de cuanto era propiedad de la Sociedad de saneamiento y fué embargado por la misma Corporación, por cuyo indebido uso, sin reposición de nada, ha desaparecido todo el ganado mular y caballar, casi todo el material, se ha destruído la fábrica y hasta han desaparecido aparatos mecánicos de la misma, sin que pueda alegarse como justificación de esta desaparición la destrucción natural del uso, puesto que la fábrica no ha funcionado ni un sólo día después de la ilegal incautación, ni se han empleado para el servicio algunos aparatos.

Ante tales hechos, surge la consideración de que la responsabilidad del Municipio, ante una definitiva resolución de los Tribunales en los pleitos pendientes, sería de trascendentales consecuencias, puesto que aquél no podría ya entregar, ó mejor dicho devolver, los bienes embargados que retuvo en su poder como depositario, en cuyo caso las acciones que de este hecho se desprenden y que podrían entablar los concesionarios y la Sociedad General de Saneamiento, colocarían al Municipio de Madrid en una situación de tal transcendencia que no nos atrevemos hoy por hoy á describir, dejando su deducción sencilla al juicio de los Letrados consistoriales y al de aquellas personas llamadas á intervenir en las resoluciones necesarias á este verdadero caos municipal del servicio de limpiezas de Madrid.

En el mes de Abril de 1902 la Comisión tercera, en su reunión del día 19, discutió la necesidad de proponer al Ayuntamiento con la urgencia que el caso requería, medios para subsanar las múltiples deficiencias existentes en el desempeño, por Administración, de este servicio.

En todos los Vocales de la misma predominó el propósito de adoptar resoluciones, tales como la de sacar á concurso el alquiler de mulas y la adquisición de toda clase de material, acordándose que en la reunión que había de verificarse el día 21 de dicho mes, se resolviera, lo que conviniese proponer á la Corporación para salir del conflicto que en breve había de producir, para el desempeño del servicio, la carencia absoluta de ganado y material.

Habiendo llegado este acuerdo á conocimiento del apoderado del concesionario y antes que la Comisión informara en definitiva, dirigió al Sr. Alcalde Presidente una instancia, manifestando que ante el repetido número de veces que en este sentido se habían inspirado otros dictámenes de la Comisión tercera, como asimismo de diferentes acuerdos tomados por la Corporación para subsanar las antedichas deficiencias, sin que ninguna de esas determinaciones hayan sido llevadas á efecto, sin duda por razones legales basadas en los litigios pendientes, que imposibilitan, cual manifestado tiene la Comisión, la consignación en presupuestos de cantidades considerables para estas imperiosas atenciones; le hacían suponer que tal vez pudiera convenir al Municipio llegar á una transacción con el concesionario del servicio, la que, dejando obviados tan insuperables obstáculos, facilitase la solución del asunto y diera lugar á la implantación definitiva del servicio en las condiciones necesarias y convenientes á la importancia de la capital de España.



Dado este supuesto (seguía manifestando el exponente) y deseando evitar en obsequio al vecindario de Madrid, cuanto se opusiese por su parte á la resolución de un asunto de tanta importancia para la salubridad pública, proponía al Ayuntamiento la transacción de todos los referidos litigios, haciendo constar, á los efectos oportunos, que la Sociedad de Saneamiento había realizado, con su mandante Sr. Delooz, convenio de cesión absoluta, en favor de éste, de todos los derechos en el litigio por ella entablados contra la incautación del material que era de su propiedad, otorgándole, en consecuencia de tal cesión, amplios poderes para cuanto tuviera á bien pactar con el Municipio de Madrid ó sostener ante los Tribunales en defensa de los derechos hasta entonces sostenidos por la Sociedad; los cuales desde aquella fecha hacía suyos el Sr. Delooz. Acompañábase á esta instancia un pliego de bases para la transacción propuesta, y se suplicaba al Sr. Alcalde Presidente diera de todo ello conocimiento á la Corporación municipal para su más breve resolución.

Por decreto de la Alcaldía Presidencia pasó esta proposición á informe de la Comisión tercera, la cual en el mes siguiente acordó que se diera de ella traslado al Letrado consistorial para su informe. Evcuado éste, se consideró en él necesaria la justificación de los hechos consignados en la instancia del mandatario del Sr. Delooz.

El 28 de Mayo de 1902 acordó de nuevo la Comisión que el expediente volviera á informe del Letrado consistorial, para que manifestara: 1.º, si el proponente, Sr. Terrón de la Gándara, tenía ó no personalidad bastante para formular las proposiciones objeto del expediente y las bases á ellas adjuntas, y 2.º, si consideraba dicho Letrado beneficiosa para el Ayuntamiento la proposición.

El Letrado, en su segundo informe, manifestó que no consideraba suficiente la escritura de mandato presentada, por ser terminante el precepto legal consignado en el art. 1.713 del C. C., que ordena la necesidad de poder especial y que era necesaria también la concurrencia de la Sociedad General de Saneamiento, más la del otro concesionario, D. Carlos Vanden Eynden, de cuyo informe se dió el correspondiente traslado al mandatario del Sr. Delooz. En 3 de Noviembre de 1902, el Sr. Delooz y Bonet por sí mismo, y D. Luis Lasbeunes y Jáuregui, como apoderado especial de D. Carlos Vanden Eynden, dirigieron nuevo escrito al Sr. Alcalde Presidente, manifestando que, á fin de que el Letrado consistorial pudiera emitir informe definitivo en relación con lo acordado por la Comisión, acompañaban, el primero, poder especial dado á su favor por la Sociedad General de Saneamiento, y copia legalizada del acuerdo adoptado por la misma en Junta general de accionistas celebrada el día 7 de Mayo de 1902, autorizándole en ambos documentos para que en nombre y representación de aquella formulara las proposiciones de transacción antedichas, firmando y otorgando cuantos documentos fuesen necesarios hasta la terminación de estas negociaciones. El segundo, presentó otro poder ó escritura de mandato á su favor, otorgada por D. Carlos Vanden Eynden, en la ciudad de Bruselas, autorizándole á concurrir con la representación,



que ostentaba, en la prestación, de conformidad con las proposiciones y bases presentadas por el Sr. Terrón, como asimismo para poder concurrir á todo cuanto el Sr. Delooz ó su mandante pudieran convenir con la Excm. Corporación Municipal. Ambos señores pedían también se les tuviese por comparecientes en el expediente de referencia, haciendo suyas y como propuestas por ellos mismos las proposiciones y bases ya mencionadas.

Pasado de nuevo el expediente á informe del Letrado consistorial, éste consideró plenamente justificada y bastante la personalidad de los proponentes, en virtud de lo cual la Comisión tercera, en su sesión inmediata, designó la Ponencia que había de emitir el dictamen necesario, para que la Corporación pudiera adoptar acuerdos definitivos en esta nueva fase del tan discutidísimo asunto de limpiezas.

Redactada la Ponencia fué aprobada por la Comisión tercera, y en ella quedó consignado que del estudio hecho del expediente por la Comisión, se deducía el convencimiento de que el servicio de limpiezas no podría ser desempeñado por el Municipio mientras no se resolvieran los litigios pendientes entre el Ayuntamiento y los concesionarios; que se hallaba agotado todo el material y ganados, y que además era manifiesta la ilegalidad de las condiciones facultativas con que el Ayuntamiento venía desempeñando los servicios, la cual se hacía más patente ante las comunicaciones imperiosas del Excelentísimo Sr. Gobernador civil, que repetidas veces por oficio, había recordado al Ayuntamiento la ilegal situación en que tenía cuanto al servicio de limpiezas se refiere, por lo que debía inmediatamente procurarse por el Concejo una transacción de los litigios pendientes como se proponía por la representación del Sr. Delooz, volviendo las cosas al ser y estado que tenían en 1895 al adjudicarse definitivamente el servicio; que debía también rechazarse toda pretensión de indemnización, aceptándose como justo solamente lo que resultase comparativamente entre una tasación prudencial del balance verificado en 1895 de los bienes de la Sociedad de Saneamiento, y que fueron objeto de la incautación, con la resultante del que exista en la actualidad; que se solicitase por el Ayuntamiento la autorización correspondiente del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, para llegar á esta transacción, y que se nombre una Comisión especial del seno del Ayuntamiento para que resuelva con el representante de la Sociedad general de saneamiento todos aquellos puntos que conduzcan al mejoramiento y economía del servicio, á fin de dejar garantidos definitivamente los intereses municipales.

En la sesión pública de la Corporación del 13 de Marzo del corriente año, figuraba esta Ponencia entre los asuntos del orden del día, y llegado el turno de discusión y á petición de varios Sres. Concejales, quedó sobre la mesa para estudio durante quince días, cuyo acuerdo se repitió á petición de otros varios en las sesiones de los días 29 de Marzo y 5 de Abril, de modo que desde el 13 de Marzo al 11 de Abril en que fué discutido, transcurrieron veintinueve días, du-



rante los cuales fué estudiado el expediente por todos los Sres. Concejales que así lo desearon.

Llegado el 11 de Abril del corriente año, volvió á figurar este asunto en la orden del día, en unión de una enmienda al dictamen redactada como consecuencia del estudio hecho por los señores del Concejó, firmada por varios de ellos en la cual se consignaban las siguientes proposiciones:

«1.<sup>a</sup> Que el Ayuntamiento sólo se entendiera en lo sucesivo en este asunto con el Sr. Delooz ó su representante legal, en la resolución del expediente de referencia y no con la Sociedad General de Saneamiento, la cual carecía de personalidad, por haber sido desaprobada la subrogación y por tenerse acreditado en el nuevo expediente la cesión de todos los derechos y acciones de la misma á favor de dicho señor.»

«2.<sup>a</sup> Que debiendo, como informó la Ponencia, volver las cosas al ser y estado que tenían en 1895 cuando se hizo la adjudicación, y en vista de lo imperioso de la comunicación del Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, procedía dar inmediatamente posesión de los servicios al arrendatario, la cual no le había sido dada desde que se le adjudicaron los servicios; entrega de posesión que estimaban conforme en un todo con los arts. 1.091 y 1.278 del C. C., y para la que estaba plenamente autorizada la Corporación desde que, al tratar de sacar á subasta el servicio, cumplió con los requisitos prescritos en la regla tercera del art. 85 y con los del 87 y 88 de la Ley municipal.»

«Para el otorgamiento de la autorización del Gobierno á que se refieren las citas legales que anteceden, emitió informe el Sr. Gobernador civil y fué consultada la Comisión provincial, estando por lo tanto sin cumplir este requisito de entrega de posesión definitiva, y por consecuencia incumplidas las órdenes de dicha Superioridad.»

«3.<sup>a</sup> En virtud de lo ya expuesto, era también procedente el que se haga el abono expresado en la Ponencia á la persona en que se han consolidado los derechos de la Sociedad de Saneamiento y los de D. Carlos Vanden Eynden, ó sea al concesionario Sr. Delooz, único que por lo tanto puede tener y tiene personalidad suficiente para la resolución propuesta.»

«4.<sup>a</sup> Que lo indicado era, de urgente necesidad, acordar ante la carencia de material y cantidades no presupuestas para el desempeño del servicio y como único medio de establecer éste en las condiciones legales ordenadas por el Excmo. Sr. Gobernador civil.»

«5.<sup>a</sup> Que tan pronto como esta posesión definitiva sea un hecho, se nombrara del seno de la Corporación una Comisión especial con amplias facultades para que en el más breve plazo posible y con audiencia del concesionario ó su mandatario, hagan el inventario y avalúo de que se habla en el dictamen de la Ponencia, como asimismo que examine las condiciones del contrato ya otorgado que ha de cumplirse con exactitud.»

«6.<sup>a</sup> Que dicha Comisión examine también las bases propuestas objeto del expediente y redacte una Memoria comprensiva de las referidas bases que en la misma se demuestre son beneficiosas para el Muni-



cipio y el pueblo de Madrid; la cual se someterá á la aprobación del Ayuntamiento para que, una vez obtenida, se solicite conforme á las disposiciones vigentes, la autorización de la Superioridad para la reforma del contrato, debiendo éste mientras tanto y como queda dicho ser cumplido con exactitud hasta que se haga dicha reforma.

El Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en la sesión que nos ocupa, hizo á los Sres. Concejales de la Comisión la pregunta reglamentaria de si hacían suya la enmienda, obtenida contestación afirmativa, preguntó al Concejo si se aprobaba ésta, y no habiendo hablado en contra ninguno de los concurrentes, quedó aprobada; pasando á ser acuerdo la referida enmienda en sus relaciones con el dictamen, cuyo acuerdo se adoptó por 28 votos en pro y cinco en contra.

Considerando la misma Corporación que lo resuelto era de carácter ejecutivo, acordó además, en la misma sesión y á propuesta del Excelentísimo Sr. Marqués de Portago (Alcalde Presidente), nombrar la Comisión especial encargada, como se decía en la enmienda, de dar cumplimiento al acuerdo dentro de las atribuciones asignadas en la enmienda, la cual fué elegida, compuesta de seis Sres. Concejales y presidida por el mismo Alcalde Presidente.

El 16 de Junio del presente año reunióse, por primera vez, esta Comisión especial sin dar audiencia al concesionario Sr. Delooz, incumplimiento completamente contrario á lo que en este caso se acordó y consignó al aprobar la enmienda.

En esta primera sesión, la Comisión especial acordó «*dar por nulo cuanto se habia aprobado por la Corporación el 11 de Abril y solicitar del apoderado del concesionario la terminante renuncia á todo derecho y acción que á su favor pudiera haber creado el acuerdo municipal del día 11 de Abril, sin cuya renuncia no se podría entrar en ninguna negociación.*»

Se aconseja y suplica además á los compañeros de Concejo, en su dictamen, que dejen la concesión *limitada al propósito* de zanjar litigios presentes y otros probables (1), limitando á esto la acción de los que forman la Comisión especial. Propone también esta Comisión al Ayuntamiento, que en vista de una comunicación del Excmo. Sr. Gobernador civil, recordando al Ayuntamiento que está faltando á la ley, *debe procurarse, si las circunstancias así lo aconsejan, una transacción con el concesionario del servicio de limpiezas en las que se resuelvan todas las pretensiones que de una y otra parte se sustenten, rechazando toda solicitud de indemnización* y reservando las facultades del Ayuntamiento, en cuanto al fondo del asunto y respecto á la personalidad de la parte contraria, á fin de que nunca se entienda que, por el mero hecho de iniciar las gestiones con determinado individuo ó empresa, se prejuzga la representación.

Se consigna también, por último, en este dictamen, que debe solicitarse la autorización del Gobierno para hacer la transacción.

(1) El haber prosperado este dictamen dió lugar, como luego se verá, á dos nuevos litigios en vía Contencioso-administrativa, y es probable se entable algún otro en vía civil ordinaria.



Este dictamen fué aprobado en sesión pública del Ayuntamiento en 26 de Junio último.

Reunida por segunda vez la Comisión especial en los primeros días de Junio del presente año, volvió á tomar nuevo acuerdo en el sentido de que este asunto, que ya parecía terminado por ahora para el Ayuntamiento, pasase de nuevo á la Comisión de Policía Urbana, para que emitido segundo dictamen, vuelva á someterse á la aprobación de la Corporación municipal. El representante del concesionario, con fecha 23 del pasado Julio, ó sea dentro de los treinta días marcados como término por la ley Municipal, interpuso nuevo recurso de alzada para ante el Gobernador civil de la provincia, contra el acuerdo del Municipio del 26 de Junio en el que se anulaba el adoptado el 11 de Abril del presente año, en cuyos estados de tramitación de incidentes se encuentra en la actualidad este célebre asunto municipal.

## II

Situación ilegal creada por el Ayuntamiento entre él y los rematantes, entre éstos y la entidad subrogada y entre ésta para con él.—Causa y consecuencias de esta situación.—Consideraciones legales en demostración del derecho del concesionario.—Texto en que se fundan.

Nacida esta cuestión de un contrato escriturado, perfectamente legal, es indudable su transcendencia, y lo urgente por tanto que es su resolución en armonía con el derecho sancionado; solo así podrán evitarse consecuencias funestísimas para la Corporación Municipal de la capital de España.

Las numerosas transgresiones que aparecen cometidas, con persistencia sistemática, no solo en el acto primordial de la entrega de los servicios, si que también en todas sus incidencias posteriores, hacen que al razonar en esta Memoria en pro de las demostraciones necesarias á evidenciar el poco ó ningún respeto tenido por la Corporación Municipal al derecho adquirido, tengamos que hacerlo con toda la exquisitez de imparcialidad que corresponde á la importancia y delicadeza del asunto, á cuyo fin aducimos nuestra argumentación, á la par que el texto legal en que se funda.

Lo claro y evidente del derecho adquirido en virtud del contrato después de reseñados en el precedente capítulo los hechos del asunto, facilita grandemente el fundamento legal necesario para evitar la condensación de opiniones extraviadas y llevar el convencimiento al ánimo de los encargados de dar las soluciones definitivas de lo sumamente perjudicial que sería facilitar el sistema de inactividad predominante hasta ahora en el Municipio.

Por tanto, á los señores del Concejo que componen la actual Comisión de Policía urbana encargada de informar nuevamente; al Excelentísimo Sr. Gobernador civil que ha de resolver, como primera autoridad gubernativa, el último recurso interpuesto; á los ilustres Vo-



cales de la Comisión provincial que en su día han de emitir también su informe á nuestra demanda; á los dignos Magistrados del Tribunal Contencioso Provincial, ante el cual varias veces hemos recurrido y tal vez tengamos que volver; y por último, al Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento y Concejales sordos á influencias políticas y dispuestos solo á amparar á los que se ven envueltos, en sus justas aspiraciones, por suspicacias y malas artes de pasiones sistemáticas; á todos esos nos dirigimos en la completa confianza de que han de considerar como imposible á su acrisolada rectitud la complicidad en esas negligencias predominantes hasta hoy en este asunto que tal vez fueron ridículo vasallaje á concupiscencias jerárquicas para exigencias de protecciones de medro político, que así otorgada sólo fueron golpes mortales asestados contra la fe y confianza que todo ciudadano debe tener en la recta aplicación de las leyes.

La incautación del servicio de limpiezas de Madrid, previa la rescisión del contrato; el apoderamiento, con carácter de embargo provisional, realizado por la Corporación, con el material de la Sociedad de Saneamiento y la pérdida de la fianza de 32.500 pesetas acordada por aquélla en perjuicio del concesionario del servicio; son actos tan sumamente contrarios á toda ley y derecho, que no sólo no pueden basarse en nada de lo consignado en la escritura de adjudicación, sino que además son completamente contrarios á cuanto preceptúa el Código civil, la ley municipal y la de contratación de servicios públicos.

El mismo Municipio en sus diferentes dictámenes y acuerdos no ha citado ni podido citar uno sólo de los artículos de dichas leyes y decreto, como razón legal para basar en ellos la rescisión del contrato, calificada por el Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca (en su bien escrito informe, razonando su decreto suspendiendo el acuerdo de rescisión en 1897, como Alcalde Presidente), de acto que tiene todas las apariencias de un despojo.

La cláusula 14 del pliego de condiciones facultativas del contrato hecho con el concesionario, única cita aducida en apoyo del acuerdo de rescisión, fué torcidamente invocada, tergiversando de tal modo sus conceptos gramaticales y los de personalidad en ella consignados, que en esa forma se hace hasta sospechosa su invocación.

Dice así la referida cláusula: «Si el *rematante* dejara de prestar *voluntariamente* todos ó algunos de los servicios á que queda obligado, el Alcalde Presidente puede, en el acto, incautarse de las fábricas, aparatos, ganados, edificios, etc., etc., que *correspondan ó sea relativo* al servicio que resultase *voluntariamente* abandonado».

De cuyos conceptos se desprende en buena lógica que la facultad de incautación, que por tal cláusula se reservó la Alcaldía Presidencia, no era absoluta, incondicional é ilimitada, sino facultad relativa, con una condición y un justo y equitativo límite, á los cuales había que atemperarse, so pena de faltar al cumplimiento del contrato é incurrir por ello en responsabilidad (art. 30 del R. D. de 1883 y Código civil, arts. 1.281, 1.283, 1.286 y 1.091).

Consiste la condicional en que la dejación de uno ó todos los ser-



yicios sea voluntaria; y consiste la limitación en que la incautación sólo se reduzca á los bienes, material, semovientes, etc., que sean relativos al servicio que resulte abandonado voluntariamente.

Ahora bien; para saber si la Alcaldía Presidencia obró con legalidad incautándose de todo cuanto constituía la propiedad de la Sociedad, conviene saber, primero: Si hubo ó no dejación voluntaria de todos ó algunos de los servicios; segundo, si no la hubo de ninguno; y tercero, si la facultad de incautación fué legalmente ejercida contra dicha Sociedad.

**Primer punto. Si hubo ó no dejación voluntaria de todos ó algunos de los servicios.**—Para tratarlo, veamos los que enumera la escritura como de desempeño obligatorio del rematante:

*Primer servicio.* «La limpieza de calles, plazas, glorietas, paseos, rondas y demás vías comprendidas en el perímetro de Madrid, su ensanche y extrarradio.»

*Segundo.* «Los riegos de todas las expresadas vías.»

*Tercero.* «La extracción, transporte y destrucción diaria, por medio de hornos, de las basuras de las vías públicas y las que saquen de sus habitaciones los vecinos de Madrid.»

*Cuarto.* «Desagüe de los llamados pozos negros, como también de los que reciban aguas pluviales ó procedentes de fábricas, establecimientos industriales ó caños.»

*Quinto.* «La destrucción y transformación de cuanto se extraiga de los pozos negros»; y

*Sexto.* «Recogida y destrucción de animales muertos, de los desperdicios de mataderos y detritus de hospitales.»

De los distintos servicios mencionados, el que en el acta de rescisión se dice abandonado, es el primero, ó sea el de limpieza, y por tanto, según la cláusula 14, que por este supuesto abandono voluntario se invoca, la incautación, como demostrado queda, debió concretarse al material, bienes, semovientes y demás efectos que conciernen á este servicio, y, por lo tanto, queda demostrado que la realizada de todo el material fué contraria á cuanto preceptúa el contrato, siendo lógico deducir que hubo en su realización manifiesta ilegalidad y exceso de atribuciones por la Alcaldía Presidencia.

**Segundo punto. ¿No la hubo de ninguno?**—Por decreto de la Alcaldía, el día 13 de Marzo de 1897 se ofició á la Sociedad, ordenándola manifestara si era llegado el caso previsto por la condición 14 del pliego de condiciones facultativas (esto es, el de abandono voluntario) para ver si procedía aprobar la subrogación y otorgar la escritura correspondiente.

El 15 de Marzo, ó sea dos días después, la Sociedad contestó protestando de que se juzgara abandonado el servicio y afirmaba que no estaba dispuesta á consentirlo con el carácter de voluntario, y si por fuerza mayor se la obligase á dejarlos, haría uso de los derechos que le dieran las leyes. Por lo tanto, la contestación no puede ser prueba más elocuente de que no hubo dejación voluntaria, y lo es también de que la posterior incautación, fundada en la dejación vo-



luntaria, se asentó sobre una afirmación falsa y, por lo tanto, la facultad que se dijo ejercida en virtud de la cláusula 14 por la Corporación, fué falseada y contraria á toda razón y justicia.

**Tercer punto. Si la incautación podía ejercerse contra la Sociedad.**—El Ayuntamiento, al entregar los servicios á esta entidad social, lo hizo como mero encargo provisional, consignando en el acta la condición de que la entrega que se hacía no prejuzgaba ningún derecho, cuya condición, al no existir pacto en contrario, tiene concepto y carácter recíproco, esto es, que ni la Sociedad podía reclamar el respeto en la continuación del desempeño del servicio, ni el Ayuntamiento podía tampoco ejercer sobre ella derecho alguno para obligarla á la continuación en el encargo.

Es completamente contrario á toda lógica el alegar facultades para la imposición de pena ó castigo cuando, como en este caso, no existe documento escriturario que lo autorice, y mucho más contrario el atenerse para ello á otro documento, en el que además de no existir en él cláusula ó condición que obligue ni faculte respectivamente á las entidades Sociedad y Ayuntamiento sin la previa aprobación de la cesión de derechos á favor de otro consignados, especifica el castigo á cada falta por una de las cuales, suponiendo que existiera, se ha impuesto el reservado á todas, convirtiéndose así lo que se pactó como justo resarcimiento en una verdadera confiscación hecha por un dictatorial acuerdo de una autoridad local; confiscación que ni puede dejar de tener ese aspecto en la resolución adoptada con la Sociedad General de Saneamiento, ni puede tampoco por las razones antedichas merecer otra denominación en lo ejecutado con la fianza de 32.500 pesetas del rematante; pues si bien es verdad que la referida cláusula 14 dice que «si el *rematante* dejara de cumplir *voluntariamente*», también lo es el que con la situación creada á éste por el Ayuntamiento por la entrega provisional hecha á la Sociedad General de Saneamiento, no sólo le imposibilitó en absoluto para cumplir lo pactado, sino que le colocó en un estado de derecho tan irregular y anómalo, que ni podía desligarse de sus pactadas obligaciones, ni tampoco recabar la entrega de los servicios para proceder á su cumplimiento.

Por consiguiente, esta situación ó estado de derecho que tan claramente se especificó en el contrato, fué con estos actos convertida de tal manera en irregular é indefinible, que por ellos aparece unas veces reconocida y otras negada la personalidad jurídica á la Sociedad y á los concesionarios, ya entregando á aquella provisionalmente los servicios, ya exigiendo, por incumplimiento de este encargo, responsabilidad á los concesionarios, ya dejando de prejuzgar derechos á la Sociedad que luego se ejecutan, ya amparándose en el contrato de adjudicación para deducir responsabilidades al subrogado, al par que se desaprueba la subrogación y se niega la entrega al adjudicatario, ya, en fin, condenando á éste á perder su fianza por incumplimiento de un servicio contratado, que por falta de posesión ni dejó de cumplir ni pudo realizar. Y así, de error en error, de arbitrariedad en arbitrariedad, se hizo cada vez más difícil ó imposible toda solución, tanto por parte del



Ayuntamiento como contratante, como por la del arrendatario como contratista. No se respetó por el Ayuntamiento ni lo condicional de la cláusula 14 ni lo limitado de los castigos previsoramente consignados en la misma, falta que no hubiera podido cometer; si en vez de hacerse la entrega provisional sin prejuzgar ningún derecho, se hubiera aprobado ó desaprobado la subrogación hecha por el concesionario, otorgando en el primer caso la escritura con la Sociedad ó dando, en el segundo, posesión definitiva al contratista.

Así lo informaron todos los Letrados consistoriales; así estaba estipulado en el contrato; así taxativamente está legislado en la Ley de Contratación de servicios públicos; así lo ordena el Código civil, y así, por último, lo demandaba el buen juicio, la seriedad y la rectitud que debe presidir en todas las resoluciones de la Corporación, á cuya gestión están encomendados tan sagrados intereses del vecindario de Madrid.

Al no entender así el Ayuntamiento este asunto de clarividencia suma, cabe dudar si estos actos estarían tal vez basados en la confianza de influencias de posición de ciertas personalidades, que al obtenerla, júzganse ya á cubierto de responsabilidad por sus actos administrativos; pues de lo contrario, habría que reconocer el desconocimiento más absoluto de elementales nociones legales, lo cual es absurdo suponer después de los múltiples informes de los Letrados consistoriales y de lo manifestado y escrito por el Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca, cuando desempeñaba la Alcaldía Presidencia, el cual, en uso de las atribuciones de su cargo y cumpliendo conforme á la ley y conciencia, supo suspender á tiempo, sin duda previendo transcendentales consecuencias de responsabilidad, el acuerdo tomado por la Corporación municipal en Marzo de 1897.

Es innegable de todo punto, que la subrogación nació al amparo de un contrato legal, en el que se pactó este derecho y se concedió la autorización de su uso en un plazo fijo; no lo es menos el que, una vez realizado este acto, era aún necesario para su validez la aprobación del Ayuntamiento, y por tanto, los concesionarios estaban en el deber inexcusable de comunicar á la Corporación el uso de tal facultad.

Ahora bien; la primera condición, ó sea la del plazo señalado, demostrado está sin contradicción alguna (y consignado así en los informes de los Letrados consistoriales), que fué fielmente cumplida en conformidad con el art. 24 del Real decreto de Contratación de Servicios públicos de 4 de Enero de 1883, y respecto á la segunda también lo está que después de haber sido repetidas veces comunicada al Ayuntamiento la cesión, éste, al cabo de dos años, acordó la no procedencia en aprobarla, con cuyo negativo acuerdo, *ipso facto*, quedó anulada (arts. 1.114 y 1.156 del C. C.), y por tanto desligada en absoluto la Corporación con la Sociedad, y sentada ya definitivamente, desde aquel momento, la falta de personalidad de ésta para exigir cumplimientos de cláusulas, pactos ó condiciones que ni existían ni podían existir estipuladas por el encargo provisional, sin fuerza legal para basar esta misma personalidad en otorgamientos escriturarios realiza-



dos entre el Ayuntamiento y los rematantes, y por último, terminado el estado excepcional de interinidad con que fueron entregados los servicios á la Sociedad General de Saneamiento y afirmada la permanencia incuestionable de derechos y obligaciones del concesionario. Hechos son éstos que también repetidas veces han sido reconocidos por todos los Letrados consistoriales.

¿Puede alegarse la existencia de un cuasi contrato á favor de la Sociedad General de Saneamiento por la obligación que contrajo en este encargo provisional, en el que ni se limitaba tiempo ni se pre-juzgaba para ello derecho alguno? Terminantemente está prescrito este caso en el Código civil, en cuyo art. 1.889 se establece que para que pueda alegarse existencia de cuasi contrato, es necesaria la cualidad de oficioso del gestor del asunto; cualidad que no existe en la Sociedad, puesto que la prestación de los servicios no la hizo por sí y ante el abandono del mismo, sino por acuerdos oficiales de la Corporación, que constan en acta y que no prejuzgaron derecho alguno: prescripción legal que también se desprende del texto de la Ley de Contratación de servicios públicos, que dice que *«los rematantes podrán ceder y traspasar válidamente los derechos que nazcan del remate, siempre que la Corporación interesada asienta á la cesión ó transferencia» sin exceptuarse en este caso la presunción de existencia de cuasi contrato*, sino que por el contrario, en el art. 25 dice terminantemente que, *entre el contratista ó adjudicatario y la entidad á quien cedere los derechos de rematante debe hacerse la escritura pública aunque el contrato entre Corporación y cedente se hubiese formalizado sin ella*, precepto que viene á darle más fuerza y vigor el segundo párrafo del art. 27 que establece el principio de que *la Corporación contratante sólo queda obligada por la adjudicación definitiva*.

Circunstancias y preceptos legales que no han tenido presente los autores de ciertos escritos en los que se consignan afirmaciones en pro del sostenimiento de la existencia del cuasi contrato.

Apartándonos en esta Memoria del alcance antijurídico que puedan tener los actos ejecutados por el Ayuntamiento al hacer entrega del servicio provisionalmente á la Sociedad de Saneamiento y concretándonos al que tiene el de adjudicación, diremos, que la opinión de todos los Letrados es la de que sólo á este hecho debió atenderse la Corporación Municipal en todos sus acuerdos posteriores, y para ello la norma de conducta legal del Municipio estaba impuesta en la escritura pública de 1895, de la que apartándose, siquiera fuese al principio, en cuestiones que creyó de poca entidad, incurrió desde luego en dificultades que fueron acreciendo á medida que por subsanar aquéllas iban dejándose incumplidas las cláusulas más importantes del contrato de arrendamiento, y por tanto violándose las de los pliegos de condiciones facultativas aprobados por el Gobernador y bajo cuyas bases dió su autorización el Gobierno para sacar á subasta el servicio.

Explicitas y terminantes son las condiciones 3.<sup>a</sup>, 4.<sup>a</sup> y 5.<sup>a</sup> del contrato; á ellas, por tanto, debió atenderse el Ayuntamiento cual hizo el concesionario en sus comunicaciones oficiales de 11 de Julio y 5 y 13



de Agosto de 1895. Mas lejos de hacerlo así, y prescindiendo de cuantos informes habían sido emitidos para ilustrarla sobre la materia, mandó paralizar los expedientes, aduciendo para ello razones cuya consecuencia envuelve un abuso de poder por todo extremo notorio é intolerable, pues consagran errores en abierta hostilidad con todos los preceptos legales y coloca barreras al paso previsor de cuanto evitar quisieron los legisladores de contratación de servicios públicos, acto atentatorio que debiera preocupar al actual Ministro de la Gobernación; pues de esta manera se colocan los Ayuntamientos en un estado de negligencia para el cumplimiento de la ley, que de cundir, pudiera dar lugar á perjuicios para los intereses generales, no ya en atribuciones de salubridad é higiene como la del caso que nos ocupa, sino en otras de no menos capitalísima importancia.

La falta de solución definitiva, en este tan entonces sencillo asunto de las limpiezas de Madrid, tuvo que crear necesariamente un estado de hecho y de derecho que, aunque parecía *á forciori* de imposible solución, era aún, á nuestro entender, conciliable con el contrato, á cuya consecución bastaría haber seguido al pie de la letra las opiniones del pleno de Letrados consistoriales y atenerse á lo taxativamente especificado en las referidas cláusulas 3.<sup>a</sup>, 4.<sup>a</sup> y 5.<sup>a</sup> del pliego de condiciones facultativas.

No lo juzgó así conveniente sin duda el Ayuntamiento y de tal absurdo, nació la creencia de que la solución única estaba en la rescisión del contrato, con incautación del material de la Sociedad y la pérdida de la fianza por el concesionario.

Error crasísimo, altamente lamentable y de fatalísimas consecuencias, pues acrecentando mucho más el desconocimiento de la situación legal de las personalidades jurídicas y vulnerando más y más los derechos creados, trajo, como era consiguiente, la necesidad en los perjudicados de acogerse al amparo de las leyes contra el olvido de esos derechos, y he aquí ya la racional presunción de efectividades de responsabilidad para la Corporación municipal por haber, con sus improcentes actitudes, arrojado fructífera semilla al campo de la contienda judicial, que sólo podía producirle malezas que la estorbase el paso para el regular desempeño de esos servicios municipales de tan esencialísima importancia para la capital de España. Por tanto confundidas con tal determinación las entidades ligadas al contrato con las que no lo estaban (por disfrutar sólo de un mero encargo provisional que nada prejuzgaba), atropellados los derechos nacidos del documento escriturario y hecha la ilegal declaración de pérdida de la fianza de los concesionarios, tuvieron por necesidad que interponerse los siguientes recursos de alzada: uno por la Sociedad General de Saneamiento, fundado en que las propiedades de que se la despojaba por el Ayuntamiento no estaban en nada ni por nada afectas á contrato alguno, y otro por los concesionarios, basado en la ilegal privación del disfrute de su derecho por supuestas faltas en los pactos del contrato, que de juzgarse incumplido sólo lo fué por el Ayuntamiento al no entregar á aquellos los servicios, una vez desaprobada la subrogación, y además



en la injusta responsabilidad que contra los mismos se pretendía hacer efectiva por faltas que ni cometieron ni pudieron cometer, imponiéndoles la privación ó pérdida de la fianza de 32.500 pesetas, que sólo se constituyó para responder al cumplimiento de ciertas cláusulas del contrato que no podían tener efecto sin la entrega de los servicios, y cuya cantidad tenía que ser devuelta cuando, una vez en posesión de los mismos, se hubieran cumplido dichas cláusulas, en conformidad con lo dispuesto en el Código civil en su art. 1.091 que expresa que «las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos», lo cual establece también la ley de Contratación de servicios públicos de 4 de Enero de 1883, bajo la cual se hizo esta subasta.

El documento escriturario otorgado entre el Ayuntamiento y los concesionarios es un contrato de arrendamiento de servicios públicos oneroso y remuneratorio comprendido entre los definidos en el artículo 1.274 del C. C., con pacto de obligaciones recíprocas entre ambas partes contratantes, cuya validez y cumplimiento en lo que á cada una corresponde no puede dejarse al arbitrio de cada otorgante, y por lo tanto no puede presumirse su cumplimiento á cada uno, sino que debe y puede exigirse al tenor de lo expresamente estipulado (arts. 1.091 y 1.278 del C. C.).

Ahora bien; adjudicado el servicio definitivamente, hecha después la escritura de adjudicación, entregado el servicio provisionalmente á la Sociedad de Saneamiento, desaprobada más tarde la subrogación hecha á favor de esta Sociedad, para después no dar inmediata posesión definitiva al concesionario conforme á las cláusulas correspondientes del contrato ¿puede alegarse en pro de la rescisión el incumplimiento de lo pactado? Bien claro y terminante lo expresa el Código civil en su art. 438 diciendo: «la posesión se adquiere por la ocupación material de la cosa ó derecho poseído ó por el hecho de quedar éstos sujetos á la acción de nuestra voluntad ó por los actos propios y formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho». Mas como en el caso presente el acto de otorgamiento del contrato no daba la posesión, y si el derecho á ella, dicho se está que para que aquélla pudiera tener efecto, era necesaria inexcusablemente la entrega del objeto ó cosa causa del contrato cuya entrega constituía precisamente una de las obligaciones contraídas por el Ayuntamiento, no pudiendo, por tanto, alegarse como prueba de cumplimiento realizado de esta obligación, la entrega hecha á la Sociedad General de Saneamiento, que nada justifica ni puede justificar en pro de este aserto por las siguientes razones: Primera, porque según el art. 436 del C. C., la posesión, al disfrutarse, tiene que ser en el mismo concepto en que fué adquirido el derecho, salvo pacto en contrario, que no existe en este caso; segunda, porque el Ayuntamiento, en sus actas de entrega á la Sociedad, quiso é hizo que quedara consignado, para evitar sin duda torcidas interpretaciones posteriores, que aquel acto de entrega nada prejuzgase ni creara derecho alguno entre las partes contratantes, y como quiera que éstas sólo lo eran los concesionarios y el Ayuntamiento, no pudo



esa entrega nacer en esa forma al amparo de este contrato, pues en la condición antes dicha existe ya un verdadero pacto en contrario; tercera, porque sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio (art. 447 del Código civil); cuarta, porque mientras que los actos relativos á la posesión son ejecutados ó consentidos por el que posee una cosa ajena como mero tenedor para disfrutarla ó retenerla en cualquier concepto, no perjudican al dueño en su posesión á no ser que éste hubiese otorgado á aquél facultades expresas para ejecutarlos, excepción que tampoco puede alegarse en este caso, pues si bien existen en la subrogación hecha por el concesionario estas facultades, no es menos cierto que al otorgarlas fué con la condición de que el Ayuntamiento lo aprobase, *sin que en caso contrario esto supusiera renuncia á los derechos estipulados en la condición 5.<sup>a</sup> del contrato*, por cuyas razones, cualquiera que sea la generalidad de los términos del contrato no puede entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que las partes se propusieron contratar (art. 1.283 del C. C.).

Sentados estos preceptos legales, cabe ahora examinar la validez y consecuencias de la incautación bajo otro aspecto consignado por la misma Corporación Municipal y del cual no nos hemos ocupado hasta ahora.

Para ello es de todo punto necesario no olvidar que en la relación de hechos manifestamos que esta incautación se hizo con el carácter de embargo provisional, para lo cual no autoriza al Ayuntamiento ni la ley Municipal ni le dió facultad ó atribuciones el contrato y cuya falta de autorización, sin duda, fué una de las causas que aconsejaron la suspensión de tan ilegal acuerdo de rescisión é incautación en el año 1897 al entonces Alcalde Presidente, Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca; pero prescindiendo de aquel acto de incautación, (tal vez cometido con abuso de autoridad, que no queremos calificar y que será base en su día, si necesario fuese, para entablar acciones de derecho á que no hemos acudido hasta ahora), consignaremos solamente que son decisiones de jurisprudencia, hace tiempo establecidas, que los embargos preventivos son ilegales en los casos siguientes: *Primero*. Cuando no son ejecutados por Jueces de primera instancia ó en caso de suma urgencia por los Jueces municipales.—*Segundo*. Cuando el embargado no se ausenta subrepticia ó cautelosamente ni consta que trate de ocultar sus bienes y tiene además arraigo suficiente para responder de la cantidad en que se le supone alcanzado.—Y *tercero*. Cuando en la tramitación del pleito no ha sido declarado en rebeldía.

Además de las expresadas razones y aun en el supuesto de que estuviese el decreto de embargo en las facultades del Alcalde Presidente, cabe preguntar, ¿puede hacerse este embargo por tiempo ilimitado, dejando así como confiscados unos bienes que se embargaron justa ó injusta, legal ó ilegalmente *con carácter provisional*? Por sentencias numerosas se establece que desde el momento en que un embargo preventivo ó provisional no es ratificado dentro de un término legal, queda anulado de derecho. Este término legal ha transcurrido ya



con exceso y el Ayuntamiento no se da por enterado ni ha intentado como está ordenada la ratificación judicial de este acto. ¿Qué gravedad no encierra esto? Y si á estas arbitrariedades y transgresiones de la ley agregamos la pena ó castigo arbitrario impuesto al concesionario, incautándose, no ya como embargo, sino como pérdida absoluta, de una fianza de 32.500 pesetas, alegando para justificar la incautación el que ha dejado incumplido lo que no pudo cumplir por falta de posesión ó entrega de la cosa sobre que había de recaer el cumplimiento, ¿no puede esto calificarse de verdadero despojo? Si así es como debe calificarse, hay responsabilidad marcada de una manera terminante en el Código penal, y si no lo es, diremos con el Sr. Sánchez de Toca que tiene todas las apariencias de ello y añadiremos por nuestra cuenta que de una ú otra manera reclama justicia.

Aducidas ya las causas y consecuencias que han dado origen á la ilegal situación creada entre el Ayuntamiento y los rematantes y entre aquél y la Sociedad General de Saneamiento como entidad subrogada condicionalmente y dada la mucha extensión que por necesidad hemos tenido que dar á este trabajo, dejamos de alegar más circunstancias y razones jurídicas ó fundamentos legales en descargo de la acusación de incumplimiento con que se quiere dar fuerza legal á los acuerdos de rescisión é incautación. Los numerosos dictámenes emitidos por Comisiones, personal técnico, Inspectores y Letrados de la Excmo. Corporación han venido á demostrar lo incuestionable de nuestro derecho, y por lo tanto no cabe calificar de temeraria nuestra actitud, en la que á mayor abundamiento nos han ilustrado Letrados de gran prestigio en el Foro español, alguno de los cuales hemos ya citado en las páginas de esta Memoria.

### III

Situación actual del Exmo. Ayuntamiento para el desempeño del servicio.—Imposibilidad de salir de ella sin una transacción.—Demostración de los perjuicios causados al Erario municipal por la rescisión.—Consecuencias irrogadas con dicho acto al vecindario y salubridad de Madrid.

Desde la rescisión del contrato, el servicio de Limpiezas de Madrid viene desempeñándose por administración del Ayuntamiento.

Repetidas veces el Excmo. Sr. Gobernador civil oficialmente ha recordado á la Corporación Municipal lo incumplida que en esta parte tiene la ley de Contratación de servicios públicos, ante cuyas comunicaciones multitud de veces algunos Concejales y Alcaldes Presidentes han llamado la atención del Concejo en sesión pública sobre la necesidad de solucionar este asunto; sus observaciones se han acogido con entusiasmo y decisión en los primeros momentos para caer después en el indiferentismo más absoluto ó en negligentes actitudes ya engendradas por la carencia de propio criterio y estudio del asunto, ya por pueriles temores alimentados por bastardas presiones, que reñidas con los principios de justicia van por desgracia tomando car-



ta de naturaleza en España hasta el extremo de tener que considerarse como prodigalidades generosas todo lo que sea sanción de justicia.

No nos ciega la pasión del asunto defendido, ni nos guían enconos personales; por el contrario, demostrado tenemos en siete años de espera, sin acudir á procedimientos legales de resultancias extremas, que no somos instrumento consciente del despecho. Esta norma de conducta, voluntariamente impuesta, hace que tengamos, tal vez con perjuicio de nuestro derecho, que refrenar la pluma, suprimiendo por ahora la consignación de hechos y comentarios respecto á las causas de irresolución prolongada de este asunto; pruebas demostrativas no nos faltan para solicitar el fallo popular, tribunal supremo á quien sólo acudiremos si á ello nos obligan nuevas persistencias en el desconocimiento de la razón y justicia de nuestras argumentaciones.

Sabido es que el Municipio ha pretendido, en más de una ocasión, subsanar las deficiencias existentes en el desempeño de estos servicios presupuestando cantidades pequeñas para adquisiciones de material y ganados, pero estos mismos acuerdos ponen más de relieve su negligencia en la resolución definitiva, pues dichas consignaciones, tan continuas, al par que insuficientes, han dado por único resultado al cabo de algunos años gasto excesivo sin obtención de provecho alguno, pues público y notorio es que continúa la Administración Municipal sin material, sin ganados, sin aquellos fondos inútilmente invertidos, y lo que es más triste, sin haber realizado una sola de las reformas de higienización tan necesarias en esta capital.

Que no son estas apreciaciones acusaciones gratuitas lo demuestran bien claro y terminantemente los informes dados por los mismos Letrados consistoriales; en ellos repetidas veces se consigna que la situación del Ayuntamiento para una resolución radical es imposible mientras no se adopten por la Corporación acuerdos y soluciones armonizadas con los derechos creados y definidos en el único documento público hasta ahora otorgado al amparo de la ley de Contratación, y para demostrarlo legalmente aducen estos mismos Letrados asesores del Concejo razonamientos de hecho y de derecho que no sólo no han sido hasta hoy rebatidos por nadie, sino que por el contrario se han aceptado y confirmado por autoridades competentísimas en la materia durante su desempeño del cargo de Alcaldes Presidentes; buena prueba de ello es el tantas veces citado folleto del Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca, del cual, y en apoyo de cuanto venimos afirmando, reproducimos los siguientes párrafos:

«El supuesto de derecho fundamental (del acuerdo de rescisión) consiste en proceder como si mediara entre el Ayuntamiento de Madrid y la Sociedad General de Saneamiento un contrato formalizado y escriturariamente perfecto con arreglo á las disposiciones del Real decreto de 4 de Enero de 1883, para la contratación de servicios públicos. Mas á la par de esto resulta que entre el Ayuntamiento y dicha Sociedad, interinamente encargada del servicio de limpiezas, no existe relación de contrato escriturado sobre el particular, ni aparece convenida siquiera una subrogación con carácter definitivo.»



«Así se ha producido sobre este servicio tan capital para el Municipio este estado de cosas verdaderamente difícil de explicar y definir en derecho, por el cual *no cabe dirigir al rematante cargos y responsabilidades por incumplimiento de sus obligaciones, puesto que él.....* puede alegar además que á virtud de acuerdos, consentimientos y disposiciones de la Administración, no tiene á su cargo tales servicios ni ha entrado en posesión de los mismos. Y tampoco es llano aplicar rescisiones por incumplimiento de obligación y menos derechos de incautación según contrato, ni determinar las responsabilidades escrituradas con un encargado interino con quien no ha mediado contrato escriturado.»

«A fin de prevenir ó por lo menos atemperar semejantes tropiezos en resoluciones que se han de tomar por colectividades, la prudencia de los reglamentos y las prácticas sobre el modo de funcionar las Comisiones Municipales, tienen establecida al frente de cada una de ellas una acción presidencial con atribuciones adecuadas á encauzar y normalizar la gestión de los asuntos.»

Los propios conceptos de concesionario y rematante parecen haber perdido, respecto de la contratación de los servicios de limpieza de la Villa, la claridad y fijeza jurídica de sus designaciones. Buena prueba de ello es que en los dictámenes y votos particulares de la Comisión y en acuerdos del Ayuntamiento, unas veces á la Sociedad General de Saneamiento se la califica de rematante y concesionario, como si la subrogación hubiera sido aprobada, y otras, por el contrario, se la niega personalidad hasta para el mero desempeño interino. Mas aun cuando se apliquen con impropiedad los tecnicismos de la terminología jurídica, conservan estos siempre su significación y valor propio, y..... no basta que una de estas partes denomine inadvertidamente concesionario y rematante á quien no tiene la plenitud de tales títulos.»

Estas opiniones, *sustentadas por un Alcalde Presidente en plena posesión del cargo*, al par que demuestran de una manera evidente sus rectos propósitos en este asunto, dejaron prejuzgada la significación de las sucesivas irresoluciones, la que para hacer más comprensible, basta con fijarse en todo lo que viene ocurriendo con las negociaciones llevadas á cabo en pro de la transacción. La mayoría de los Concejales del Ayuntamiento, con sus 28 votos emitidos en favor de la misma el 11 de Abril, la Comisión de Policía Urbana con su informe, los Sres. Concejales autores de la enmienda aprobada en dicha sesión y el Letrado informante en las proposiciones presentadas, demostraron con sus opiniones, basadas en el detenido estudio, la nece-



sidad imperiosa é imprescindible de una inmediata resolución, y la conveniencia, para la consecución de este propósito, de aceptar la transacción propuesta. Afirmaron y demostraron todos ellos que los servicios no pueden casi desempeñarse, y se excitaba, por último, al Municipio, en esos informes y documentos, á resolver con verdadero conocimiento de causa este asunto, excitación y razonamientos que indudablemente produjeron efecto en el ánimo de toda la Corporación, puesto que tan pronto como se puso el asunto á la orden del día en la sesión primera del mes de Marzo del próximo pasado año, se solicitó por varios Sres. Concejales que el expediente quedara sobre la Mesa para estudio, petición que fué repetida en diferentes sesiones sucesivas, con el mismo propósito, por otros varios, y de cuyos numerosos exámenes y estudios en el expediente surgió la enmienda, en la que se trasluce la satisfacción de sus firmantes por ver llegada la hora de poner término á ese estado irregular, altamente ilegal y preñado de grandes responsabilidades para la Corporación, en servicio de tantísima importancia.

Dada cuenta de esta enmienda en la sesión de 11 de Abril del presente año, fué en el acto acogida hasta con júbilo por la inmensa mayoría de los Concejales, y aprobada sin la discusión y debate que demuestra disparidad de opiniones, es decir, casi por unanimidad.

El Alcalde Presidente, Exmo. Sr. Marqués de Portago, dió en el acto carácter ejecutivo al acuerdo y procedió á la designación para el nombramiento de la Comisión encargada de llevar á efecto lo acordado, cuya proposición, *en la que él se reservaba la Presidencia*, fué aceptada por unanimidad.

A los dos meses y medio reúnese esta Comisión para proceder al cumplimiento del acuerdo á ella encomendado, y entonces surge de pronto el yetator oculto, el férreo anillo, el ser misterioso que se agita entre sombras, y cámbiase por completo la mejor, la más salvadora y tal vez única solución bien pensada para dar paso á temores y recelos que sin duda engendró el terror, hasta el extremo de hacer exigir á los Vocales de esa Comisión de una manera despótica en su dictamen extralimitativo, la renuncia expresa del concesionario á cuantos derechos nacer pudieran del acuerdo anterior, y ¡oh poder de los maleficios! la probabilidad de nuevos pleitos ó recursos de alzada, la afirmativa hecha en aquella sesión de culpas, la probabilidad racional de retirada de las proposiciones de transacción presentadas que llevaría consigo el término de las esperanzas de evitar probables sentencias condenatorias en los pleitos pendientes con la consiguiente indemnización, la seguridad de tener en un plazo brevísimo solucionados los obstáculos que hoy se oponen al proyecto de un servicio de limpiezas propio y adecuado á las necesidades de esta capital; nada, nada de esto bastó á contener aquellos ocultos temores, á aquel miedo de generación espontánea; todos los perjuicios fueron preferibles. ¿Qué ocurrió para esto? He aquí el misterio.

Nadie motejó la resolución del 11 de Abril, sino que por el contrario, aún hoy se afirma y asegura en conversaciones habidas con



motivo de este asunto, fuera del salón de sesiones del Ayuntamiento, que dicha resolución era la obra de paz y de armonía eficacísima, en donde quedaban despejados los horizontes del problema planteado, por la completa confusión dada anteriormente á las personalidades, derecho y atribuciones de toda entidad ligada ó desligada con el contrato de arrendamiento, sin embargo de lo cual, el derecho de la razón y la justicia vinculado con el provecho legal de todos los interesados en cuestión de tal interés, se pospuso una vez más á las conveniencias personalísimas de *un alguien*, que, ó goza de despótico mandato ó cuenta con hipnótico poder sugestivo de tal naturaleza, que sabe avasallar la ajena voluntad, hasta el extremo de hacer espirar todo asomo de aureola de justicia moral que se oponga á sus designios.

La situación especialísima á que hoy por hoy debemos atemperar nuestra conducta en la redacción de esta Memoria, y la imparcialidad en sus conceptos prometida desde el principio de la misma, nos veda entrar en otro orden de consideraciones importantísimas, que por lo increíbles, pudieran juzgarse como falta de cumplimiento á tal promesa.

Sin embargo, y á fin de que por la omisión de esas mismas consideraciones no se extravíe la opinión pública, y de que la prensa no acoja con inconveniente confianza en sus columnas equivocados conceptos, nos concretamos á publicar á continuación cifras demostrativas de los perjuicios que al Erario municipal del pueblo de Madrid viene causando durante cerca de ocho años la ilegal rescisión del contrato.

Desde que empezó á regir el presupuesto municipal de 1898, el Ayuntamiento gasta anualmente las siguientes cantidades en el servicio de limpiezas:

	Pesetas.
Jornales.....	572.000
Limpieza de pozos negros.....	70.000
Arrastre, ganarlos, etc., etc.....	380.000
<b>TOTAL EN CADA EJERCICIO.....</b>	<b>1.022.000</b>
Cantidad en que se adjudicaron en 1895.	650.000
<i>Diferencia ó pérdida anual para el</i> <i>Erario municipal.</i> .....	372.000

O sea el interés anuo de más de 8.000.000 de pesetas, con cuyo capital se podía ó haber ejecutado obras de higienización de que tan necesitado está el vecindario de Madrid, ó amortizado deuda municipal disminuyendo la cifra de empréstitos que se proyectan.

De la diferencia anual antedicha, fácil es deducir que en seis años que hará en el próximo Diciembre que se realizó el acto ilegal que venimos combatiendo, la pérdida total mínima es la de 2.232.000 pesetas.

Si á esta cifra añadimos la compra del material que poseía la So-



ciudad General de Saneamiento, hoy destruido por completo, y que como ya hemos dicho, costó (según facturas y libros de Contabilidad de la misma), 1.000.000 de francos, y que tendrá que reponer el Municipio, si han de seguir esperándose las resoluciones judiciales, entonces la cifra total de pérdida sería la de 3.232.000 pesetas, en el supuesto de que estas resoluciones se dictaran á fines del presente año, lo cual no es probable.

Razonamientos son estos que seguramente no se intentarán siquiera desvirtuar con otras demostraciones numéricas, pues en ese caso dispuestos estamos á discutir más al detalle, si fuera necesario, las compras de piensos, ganados, reparaciones de arreos, jornales, etc., etcétera, y hasta podríamos hacer estados comparativos entre estos gastos y las actuales existencias de personal, ganado y material, las cuales no incluimos en este folleto, por la mucha extensión que necesariamente tendríamos que darle.

No es menor el perjuicio ocasionado con esa rescisión al pueblo de Madrid (particularmente á la clase obrera) y á la Agricultura de España. Pues las basuras, materias fecales y detritus de todas clases los concesionarios tenían proyectado (cual se hace en muchas capitales del extranjero), utilizarlas como primeras materias para el establecimiento de una gran fábrica de abonos y productos químicos que darían una producción mínima de 10.000 toneladas anuales. Con la irresolución del asunto por el Ayuntamiento, el establecimiento y creación de tan importantísima industria es imposible, con la cual, si se estableciera, disminuiría mucho la gravedad de las clases obreras, que son siempre para el Municipio verdaderos problemas de difícil solución.

En esta industria encontrarían relativo bienestar y ocupación segura más de 300 familias, y tan es así, que podemos probar de una manera fehaciente nuestros propósitos en tal sentido con la exhibición (si necesario es á la incredulidad de ciertas personalidades), de los Estatutos que teníamos ya redactados para la creación de una Sociedad benéfica, Caja de Ahorros y Economatos para dicho personal, cuando en 26 de Junio nos vino á sorprender el acuerdo de nulidad de lo resuelto en sesión pública de 11 de Abril.

Por otra parte, las estadísticas de importación de abonos del mercado extranjero, en España acusan una cifra de más de 190.000 toneladas anuales, por cuya cantidad se paga por término medio francos 38.000.000, carestía de tal consideración que hace que la inmensa mayoría de los agricultores no abonen ó abonen insuficientemente sus productoras hectáreas de terreno, cosa que no ocurriría si la referida industria pudiera establecerse en estas condiciones y con una riqueza cualitativa en sus producciones que podría seguramente competir con las del mercado inglés, belga y alemán, ventaja de no menor importancia para el establecimiento de esa fabricación en esta capital, centro principal de todas las vías férreas de España y donde por existir la mayor cantidad de materia prima para esta fabricación, podrían proveerse de abonos para sus campos considerable número de agricultores, fin que debe ser protegido por el Municipio y hasta por



el mismo Gobierno, no sólo por el beneficio antedicho, sino por el económico financiero de la nación, puesto que por lo menos podría tal vez en esta producción establecerse precios de exportación que en relación con el de los cambios en el pago de otros géneros importados contribuirían seguramente en algo á la nivelación de las cotizaciones vergonzosas del 34 á 38 por 100.

La tonelada de abono fabricado en estas condiciones podría expendirse al agricultor español con una considerable diferencia en su beneficio del precio marcado en las tarifas extranjeras, diferencia de base fundamental para el progreso de la agricultura, que unido á un millón de pesetas anuales, por lo menos, que en la fábrica obtendría por mano de obra el personal obrero, había de ser un nuevo elemento de vida para este capital.

Por consiguiente, calculando por ahora sólo los perjuicios enumerados anteriormente, podemos formar el siguiente balance:

Déficit anual para el Municipio en los servicios de limpiezas, riegos, etc., etc., término medio.	372.000	pesetas.
Pérdida anual para el obrero por mano de obra de la fabricación. . . . .	1.000.000	»
Pérdida anual para la agricultura por diferencia de precios y cambios. . . . .	1.650.000	»
Pérdida para el ramo de construcciones por no poderse montar y construir la fábrica de abonos y productos químicos. . . . .	500.000	»
Reposición del material que fué de la Sociedad de Saneamiento conforme al inventario y tasación que aparece hecho en acta notarial sin incluir precios de cambio. . . . .	1.000.000	»

No adicionamos cantidades por indemnización de daños y perjuicios por la rescisión del contrato é incautación del material y fianza, porque no se interpreten como perjuicio de resoluciones que sólo competen á los Tribunales de justicia; tampoco queremos aducir otros datos fehacientes en demostración de las deficiencias de que adolece el servicio, no obstante la carestía con que vienen desempeñándose, la cual excede en considerable cantidad á cuanto se presupuestó de veinte años á esta parte.

Ante esta realidad de las cosas concernientes al servicio de limpiezas, ¿qué podremos ya decir que no resulte pálido? Las mismas Comisiones 2.<sup>a</sup> y 3.<sup>a</sup> en uno de sus informes sobre este asunto han aducido los siguientes conceptos que por sí solos y por la calidad del cargo con que se hallaban investidos, los que las consignaron, son más elocuentes en apoyo de nuestras demostraciones que todas las que nosotros pudiéramos estampar.

*«Las Comisiones que suscriben no creen posible que continúe por más tiempo tan anómala situación y entienden que es hora de que cesen esas prórrogas por la tácita que parecen indefinidas y que han sido duramente censuradas por Delegados del Gobierno de S. M. cuando giraron*



*visitas de inspección á este Municipio. Podrán no constituir abusos esas prórrogas, pero lo parecen, y es necesario por tanto concluir con ellas.*

Asimismo el Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca, en su tan repetidamente citado folleto, dice en la pág. 21: «Poco importa que contra las resoluciones de no haber lugar á incautaciones, continúen quizás levantando clamores aquellos á quienes de esta manera no se les cumplen sus deseos. La aprobación que debe buscarse es la que se forma por el juicio desinteresado de los hombres de bien, y que no se guía por los susurros de la calumnia, ni por los artificios de la envidia, ni se deja embaucar por declamaciones sin consistencia. En el desempeño de los cargos públicos, y sobre todo en las Corporaciones investidas del alto cometido de administrar y defender los intereses del común y *amparar en justicia contra atropellos el derecho de los particulares*, ninguna condición es tan necesaria como la de *saber resistir y afrontar la imposición de opiniones erróneas y arrebatadas. Acreditando esta entereza es como mejor se conquistan aquellas estimaciones y respetos por los cuales llegamos á inspirar de nosotros la confianza de que la vida no tiene bienes bastantes para indemnizarnos del olvido de uno sólo de nuestros deberes.*

Por lo tanto, demostrado queda que nuestras opiniones son las únicas que en este asunto se ajustan á los más exstrictos preceptos legales y que para refutar nuestra argumentación sería preciso cambiar de plano todos los principios y fundamentos del derecho administrativo, cosa que afortunadamente no es dable á nuestros enemigos y detractores.

El art. 20 del decreto de 1883 establece de una manera terminante que la votación que recaiga en las sesiones de los Ayuntamientos adjudicando servicios públicos, tienen el carácter de firmes y ejecutorias, y por tanto el acuerdo del 11 de Abril es ejecutorio y en él no cabía ya discusión alguna, puesto que el único recurso establecido por la ley de la demanda de daños y perjuicios que contra el mismo podrían haber entablado los particulares tiene marcado un plazo de treinta días para su interposición, el cual había transcurrido con bastante exceso el 26 de Junio, día en que el Ayuntamiento acordó ilegalmente la anulación, y si bien es verdad que en este su acuerdo no dió por rotas y terminadas las negociaciones para una transacción, no es tampoco menos cierto que la obra estaba realizada y con este acuerdo último ó se trata de convertir este asunto en una tela de Penélope ó se pretende con ello recetar un paliativo para continuar con irresoluciones que, como tan demostrado tenemos, están en contraposición con los deberes de la Administración Municipal, que no debe amalgamarse con otras influencias que aquéllas sagradas y legítimas que impongan las necesidades de la población y vecindario, cuya custodia y administración de comunales intereses le está encomendada.



#### IV

Estado legal que por convenios realizados entre el concesionario Sr. Delooz con la Sociedad general de Saneamiento y con D. Carlos Vaden Eynden han facilitado la transacción.—Ventajas de ésta para el Municipio.—Influencia de la implantación del servicio conforme á contrato en la resolución de las crisis obreras.—Beneficios que reportaría á la Agricultura de España.

Antes de dar por terminado este trabajo, interesa á nuestros derechos, á los del pueblo de Madrid, á la clase obrera y á los agricultores de España, ponerles al corriente de la situación legal y despejada por completo de inconvenientes que alegarse puedan para impedir se lleven á efecto los sanos propósitos y justas resoluciones que nos constan predominan en la Casa de la Villa sobre esta cuestión, que debe por todos ser considerada como de reconquista de crédito moral y económico necesario para el concurso de cuantos pretendan acudir como licitadores en cualquiera otra de las muchas contratas de servicios públicos que son necesarias llevar á cabo por todas las Corporaciones Municipales para reforzar con nuevos elementos los capítulos de ingresos de sus presupuestos.

Todas las debatidas cuestiones de circunstancias conjuntas que hasta hace poco fueron aducidas por la Corporación con poca, mucha ó ninguna fuerza jurídica para no poder resolver el asunto sobre la adjudicación del servicio de limpiezas de Madrid, y la rescisión del contrato, están hoy, en cuanto á confusión de personalidades se refiere, completamente despejadas.

Contratos de cesión absoluta de derechos á favor del rematante Sr. Delooz, que nunca pudo conseguir tomar posesión del servicio á él adjudicado mancomunadamente é insólidum, con el Sr. Vanden Eynden, otorgados por su coadjudicatario y la Sociedad General de Saneamiento, dan ya solucionadas al Municipio de Madrid todas las premisas que quieran suponerse entre los estados de hecho y de derecho de las distintas personalidades jurídicas que han venido sosteniendo derechos en este asunto. No hay ya, no puede haber, como justificado está con los documentos que obran en el expediente últimamente incoado por el Ayuntamiento con motivo de las proposiciones de transacción, confusión en los conceptos de concesionario y rematante, ambas personalidades se han refundido en una sola y hasta puede decirse que la mancomunidad y solidaridad entre los adjudicatarios, que parecía ser otro inconveniente de consideración, ha desaparecido también; por lo tanto, la claridad y títulos legales de tales denominaciones es ya un hecho en una sola personalidad, y el estado de derecho de todas estas cuestiones es hoy problema de facilísima resolución, dado el régimen interior de las Comisiones del Ayuntamiento, que determina el procedimiento administrativo para dilucidar, plantear y resolver dentro de la jurisdicción municipal estos asuntos; no cabe, pues, dudar que es llegado el momento de saber de una manera cierta y positiva si la Corporación considera ó no de urgencia y como de



capitalísima importancia para el vecindario de Madrid el que cese la extraña manera de desempeñarse este servicio por tácita reconducción, tan duramente censurado por Delegados del Gobierno y por diferentes gobernadores civiles en las épocas de su mando.

Incumplidas están las órdenes numerosas dadas al Ayuntamiento, incumplidos los propósitos del Gobierno al dar al mismo la autorización para sacar á subasta este servicio en 1895, incumplidos están también los preceptos consignados en el R. D. de 4 Enero 1883, é incumplidos, como demostrado queda, hasta los más terminantes artículos del Códigocivil en lo que á obligaciones y contratos se refiere, cuyos incumplimientos, con más ó menos fuerza legal, han podido hasta hoy basarse en imposibilidades dudosas para poder dar una resolución armonizada con los derechos sostenidos por entidades interinas, por entidades concesionarias y por la entidad administrativa municipal, pero ante la actual desaparición de todos esos vínculos refundidos hoy en uno sólo ó sea el del contrato otorgado entre el Ayuntamiento y el concesionario Sr. Delooz, no cabe ya, sin infundir sospechas poco airosas, disimular la sinceridad que nosotros mismos somos los primeros en consignar y reconocer existe en la inmensa mayoría de los Concejales del Ayuntamiento de Madrid, en pro de la situación fija y legal de este asunto, el cual, sancionado definitivamente en armonía con el contrato otorgado, es tan sumamente beneficioso para el Erario municipal y para el ornato, higienización y conveniencia del vecindario de Madrid, que lleva consigo las importantísimas ventajas siguientes:

1.<sup>a</sup> *Desistimiento de todos los litigios pendientes entre el Ayuntamiento y los concesionarios.*

2.<sup>a</sup> *Desistimiento de los entablados por la Sociedad General de Saneamiento.*

3.<sup>a</sup> *Desistimiento ó renuncia á toda indemnización de daños y perjuicios por las antedichas entidades, excepción hecha de la devolución del material provisionalmente embargado y la reposición de la fianza del concesionario.*

4.<sup>a</sup> *Instalación definitiva y en breve plazo en Madrid de un servicio de limpiezas en armonía con el de las principales capitales de Europa, á cuyo fin en el mes de Abril y Mayo último, y ante el acuerdo de 11 del primero de dichos meses se tenía ya comenzada y casi ultimada la negociación de nuevo y completo material con casas constructoras del extranjero, tanto en máquinas de vapor, últimos sistemas adoptados por la Municipalidad de las capitales belgas y alemanas, como en nuevos vehículos mecánicos de barrederas, regadoras y recogedoras de basuras, cubas neumáticas de instantánea anulación de vapores deletéreos para la extracción de materias fecales, y en suma, cuanto estipulado está en el contrato, con la ventaja de los nuevos adelantos mecánicos llevados á cabo en estos últimos años.*

5.<sup>a</sup> *Organización del personal obrero conforme á la reglamentación necesaria á los nuevos servicios y aparatos que permitirán hacer dos veces al día la limpieza, que hoy sólo se hace una sola y de un modo incompleto.*



6.<sup>a</sup> *Mayor retribución á ese mismo personal, haciendo así más halagüeña la situación precaria de esa clase obrera.*

7.<sup>a</sup> *El establecimiento de una nueva é importantísima industria de fabricación de abonos para la agricultura y de otros compuestos químicos que abaratarán ciertas producciones en ciertas clases de industrias.*

8.<sup>a</sup> *La constitución de una Caja de Ahorros para el personal obrero de la fábrica por participación de un tanto por ciento en sus beneficios.*

9.<sup>a</sup> *La disminución segura en las cifras anuales de mortalidad de esta capital que, como han opinado importantes personalidades médicas, es en gran parte debida á las condiciones higiénicas en que se desempeñan ciertos servicios municipales.*

Y 10.<sup>a</sup> *Una economía anual para el Municipio en el desempeño de estos servicios de más de 700.000 pesetas.*

He aquí, pues, expuesto nuestro plan y nuestros propósitos; dispuestos estamos á cumplirlos al amparo de la más severa legalidad que también en nuestro adquirido derecho exigimos como único pacto de mutuo y desinteresado apoyo á las expuestas iniciativas que juzgamos de grandes beneficios para los intereses morales y materiales á que todo individuo debe coadyuvar. No tienen, ni pueden tener cabida en nuestro ánimo, propósitos que inciten á sospechas de vanas promesas, pues garantía bastante existe estipulada en nuestro contrato para la exigencia del estricto cumplimiento, y como la buena fe se prueba con hechos, pónganos el Municipio de Madrid en posesión del derecho ya adquirido y tras de este acto la opinión pública nada tendrá que refutarnos; los hechos serán inmediatos y nuestra oferta hecha y aceptada cual cumple á conciencias honradas que ni transigen con el derecho coartado ó desconocido, ni se avienen con el engaño y la mentira para la consecución del medro personal mercantilista, pues tenemos ha tiempo arraigada convicción de que tales procedimientos antes logran el quebranto del ideal censurable que la autoridad y fuerza que se espera para la consecución de tales fines.

El Municipio de Madrid en la actualidad se halla formado por personalidades que saben contribuir al bienestar de los que sobrellevan las cargas municipales, y por tanto, es de esperar que si los propósitos por nosotros aducidos encuentran en esas personalidades el decisivo patrocinio que reclamamos en justicia, sabrán ante todo y sobre todo, administrar la concesión, que escriturada tenemos, con ese espíritu práctico, sereno y prudente de los buenos administradores, que son enemigos de codicias intermediarias desprovistas de todo escrúpulo.

Hay en este asunto para el Concejo mucho que enseñar y no poco que aprender; la delicadeza exquisita nos ha vedado entrar en ciertas explicaciones y detalles de hechos que si sentaron precedentes, sólo sirvieron para que con falaces procedimientos se nos haya hecho guerra sorda y nos obliguen á ciertas precauciones, que por desgracia tal vez tendrá que recomendarnos la misma Administración, más donde quiera que haya espíritus cultos, corazones inclinados á la justicia y conciencias orientadas hacia el reconocimiento de la verdad, allí es-



taremos dispuestos á contribuir con nuestro pequeñísimo grano de arena, al fomento de las convicciones de que el escarnio inferido á los principios del derecho y la honradez es sólo cieno arrojado por el concusionario en su propia conciencia.

Cambiar los nombres de las cosas, censurar sin fundamentar la censura, criticar sin concretar cargos, y en suma, prologar adornado de giros retóricos de modesta apariencia mental, artículos, sueltos ó noticias maliciosas, ha sido hasta hoy una de las armas con que se nos ha combatido; ataques son estos de condición tal, que sólo han merecido, y merecerán si en ellos persisten, el silencio que debe oponerse á lo que sólo se combate por sistema, sin aducir razonamientos de fuerza legal ni moral, con soluciones de continuidad irrefutables, que sólo pueden existir en la firmeza del terreno que se pisa.

El Excmo. Sr. Marqués de Lema, á cuya inteligencia directora está hoy encomendada la Administración Municipal de Madrid, tenemos por seguro que ha de mirar este asunto, tan debatido de los servicios de limpiezas, con la imparcialidad usual, en cuanto le fué confiado con los diferentes é importantes cargos que ha desempeñado.

Demostrada tiene su enemistad con lo que es deleznable y de solapada intransigencia; su perseverancia en la medición y pesantez de la razón alegada, como sanción de conciencia y amigo de rendir el debido reconocimiento á la imposición de la verdad, ha de escuchar, meditar, y resolver seguramente cuanto hemos expuesto en este folleto, con la inteligencia en el peculiar y sólo propia de los que saben comprender la magnitud de los horizontes del recto espíritu, que vislumbramos desde su nombramiento de Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.

ENRIQUE TERRÓN DE LA GÁNDARA.

Madrid 1.º de Octubre de 1903.











